



*Banco Central de la República Argentina*

101549/83



101.549/83

RESOLUCION Nº **286**

Buenos Aires,

10 NOV 2000

VISTO:

El presente Sumario en lo Financiero Nº 627 que tramita por Expediente Nº 101.549/83, dispuesto por Resolución Nº 191 del 23.02.89 (fs. 808/10), al que se acumulara por Resolución del 24.08.98 (fs.1.115) el Sumario Nº 816 - Expediente Nº 105.911/87 -dispuesto por Resolución Nº 530 ( fs. 969 sub fs. 888/90) en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, instruido para determinar la responsabilidad de la entidad **BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A.** (como continuador del **BANCO CREDITO LINIERS S.A.**) y de diversas personas físicas por su actuación en la misma, en el cual obran:

I. El Informe Nº 711/1699 del 9.12.83 (fs. 1/16) y sus planillas (fs. 52/54).

El Informe Nº 431/239/88 (fs. 795/807), que diera sustento a las incriminaciones dispuestas por Resolución Nº 191/89 - que para una mayor claridad serán nominadas como:

**-Cargo A)-** Incumplimiento de los requisitos mínimos de control interno sobre operaciones crediticias con personas vinculadas con la entidad e incorrecta integración de las Fórmulas 3519 ( Distribución del Crédito por Cliente) y 3827 (Estado de Situación de Deudores), en contraposición a lo dispuesto por la Ley Nº 21.526, artículo 36, primer párrafo y a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, punto 4.4.2., y "A" 103, CONAU-1-17, C. Régimen informativo contable mensual, Instrucciones para la integración del cuadro "Estado de Situación de Deudores", y D. Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral/anual, Distribución del crédito por cliente, Normas de procedimiento.

**-Cargo B)-** Incorrecta aplicación de recursos provenientes de recuperación de cartera afectada al "Préstamo Básico" y al "Préstamo Adicional", en transgresión a la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, artículo 28 inciso d) y a las Comunicaciones "A" 144, REMON-1-22, punto IV y "A" 177, REMON-1-42.

**-Cargo C)-** Incorrecta liquidación de operaciones crediticias, en contravención ( a lo dispuesto por la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, artículo 30 inciso c) y por la Comunicación "A" 144, REMON 1-22, punto I, subpunto 7.



*Banco Central de la República Argentina*



**-Cargo D)-** Incumplimiento de las disposiciones sobre el Préstamo Consolidado e incorrecta integración de la Fórmula 3885- Préstamo Consolidado; Determinación y movimiento de fondos - en contraposición a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y a las Comunicaciones "A" 243, REMON 1-70, punto 2°, subpunto 2, "A" 244 REMON 1-71, Anexo II, Cronograma de cancelación del Préstamo Consolidado, punto 4, y "A" 249, REMON 1-73, Anexo I, Instrucciones para la integración de la Fórmula Préstamo Consolidado, Determinación y movimientos de fondos.

**-Cargo E)-** Incorrecta aplicación de fondos obtenidos por el régimen de la Comunicación "A" 22, mediando incumplimiento del detalle de créditos refinanciados por el citado régimen y constitución de hipoteca sobre bien propio sin previa autorización del Banco Central, en contraposición a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículos 28, inciso b) y 36, primer párrafo, y a las Comunicaciones "A" 22, REMON 1-1, puntos 4.2. y 4.5., y "A" 26, REMON 1-4.

**-Cargo F)-** Carencia de antecedentes en los legajos de los prestatarios e inadecuada ponderación del riesgo crediticio, en violación a lo previsto por la Comunicación "A" 49, OPRAC-1, Capítulo 1, punto 1., subpuntos 1.6. y 1.7., y punto 3., subpunto 3.1.

**-Cargo G)-** Incorrectas registraciones contables, en transgresión a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y por la Comunicación "A" 7, CONAU-1, Normas Contables para las Entidades Financieras, A. Plan de Cuentas Mínimo, puntos 1.1. y 1.8., Manual de Cuentas, códigos 130.000 -Préstamos-, 131.700 -Sector privado no financiero-, 131.731 -Personales-, 560.003 -Remuneraciones-, 560.006 -Cargas sociales sobre remuneraciones-, 560.015 -Servicios al personal-, 711.025 -otras garantías recibidas- y 721.029 -Otorgantes de garantías-.

**-Cargo H)-** Controles mínimos a cargo del Directorio, en transgresión a lo previsto por la Circular I.F. 135, Anexo.

II. El Informe N° 761/542 del 21.12.87 (fs.969 sub fs. 3/24) y anexos de fs .969 sub fs. 25/47 e Informe N° 761/475 del 12.10.89 (fs. 969 sub fs. 473/82).

El Informe N° 064/FF/023 del 27.01.93 (fs. 969 sub fs. 871/80), que diera sustento a las imputaciones formuladas por Resolución N° 530/93 ( fs. 969 sub fs. 888/90), consistentes en:

**-Cargo 1)** Inadecuada ponderación del riesgo crediticio, mediando legajos de clientes incompletos y suministro de información distorsionada al B.C.R.A., en violación a la ( Ley N° 21.526, artículos 30, inciso b) y 36, primera parte; a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-I, Capítulo 1, puntos 1.7. y 3.1.; "A" 467, OPRAC-1-33, Anexo, punto 6.1.; "A"



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

612, OPRAC-1-57, Anexo, punto 2º; y a la Circular CONAU-1, C. Régimen informativo contable mensual. Instrucciones para la integración del cuadro "Estado de situación de Deudores" y D. Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral /anual. Distribución del crédito por cliente. 3. Normas de procedimiento.

**-Cargo 2)** Insuficiente constitución de provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos, contraviniendo lo dispuesto por la Ley Nº 21.526, artículo 36, primer párrafo, y a la Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131.901 - Previsión por riesgo de incobrabilidad - y 530.000 -Cargo por incobrabilidad-

**-Cargo 3)** Cobro de comisiones u otros cargos adicionales a los intereses, en contraposición a lo establecido por la Ley Nº 21.526, artículo 30, inciso c), y a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo II, punto 1.5. y "A" 476, OPRAC-1-34, punto 2º.

**-Cargo 4)** Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen del efectivo mínimo, transgrediendo lo normado por la Ley Nº 21.526, artículos 31 y 36, primer párrafo, y a la Comunicación "A" 10, REMON-1, Capítulo I y sus modificatorias.

**-Cargo 5)** Desvíos en el régimen de moneda en custodia, en violación a la Comunicación "A" 2, CIRMO -1, Capítulo V, puntos 1.2. y 2.2.1.

**-Cargo 6)** Irregularidades en cuenta corriente bancaria, contraviniendo lo dispuesto por las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, punto 3.2.1., segundo párrafo, y "A" 837, CAMCO-1-17, Capítulo II, punto 1.2.1.

**-Cargo 7)** Incumplimiento de los controles mínimos a cargo del Directorio, transgrediendo lo normado por la Circular "B" 682, Anexo, puntos 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.4. y 1.2.5. y Comunicación "A" 59, OPASI-1, Capítulo I, punto 3.1.7.

**-Cargo 8)** Incumplimiento de las normas sobre auditorías externas, transgrediendo lo normado por la Circular CONAU-1, Normas Mínimas sobre auditorías externas, B., Anexo III, puntos I y II B., pruebas sustantivas B. 13, B. 14, B. 17, B. 23, B. 42, B. 49 y B. 51.

**III.** La persona jurídica sumariada en estos autos, BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A..

Sobre el particular corresponde señalar que, de acuerdo con la autorización que oportunamente se le confirió, Crédito Liniers S.A. Compañía Financiera concretó la fusión por absorción de Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u Otros Inmuebles y, simultáneamente, inició el 1.11.84 sus actividades como banco comercial, bajo la denominación de Banco Crédito Liniers S.A. (ver sobre el particular Comunicación "B" 1339 del 6.11.84- fs. 793 y fs. 969 sub fs. 1109, sub fs. 3).



*Banco Central de la República Argentina*



Al respecto corresponde puntualizar que de conformidad al compromiso de fusión suscripto entre ambas entidades (fs. 952, sub fs. 3 y 5/7) y a la Resolución N° 442, del 17.11.83 del H. Directorio de este B.C.R.A., punto 5., "...La entidad incorporante deberá asumir las obligaciones que eventualmente pudieran afectar a la entidad incorporada, por los cargos y reajustes que determine este Banco Central, originados en el incumplimiento de las regulaciones contenidas en las Leyes N° 21.526... Asimismo responderá con igual alcance por las sanciones previstas en el artículo 41, inc. 3) de la Ley N° 21.526, a que se hiciera pasible la entidad absorbida, en virtud de los sumarios en instrucción o que se resuelva instruir por infracciones a las mencionadas disposiciones legales, sus normas reglamentarias o resoluciones dictadas por esta Institución..." (conf. fs. 952, sub fs. 10).

Asimismo, por escritura de fecha 20.07.88 se documentó el cambio de denominación por el de Banco Liniers Sociedad Anónima (conf. fs. 969, sub fs. 1109, sub fs. 3 vta).

Finalmente, y por Informe N° 579/1294 del 17.06.99 Autorización de Entidades Financieras corrobora que la entidad financiera cambió su denominación por la actual Banco Liniers Sudamericano S.A. -Comunicación "B" 4957 del 18.06.92 (conf. fs. 997 sub fs. 2).

IV. La nómina de personas físicas involucradas en el sumario dispuesto por Resolución N° 191/89 (fs. 808/10) señores: NESTOR CLAUDIO PORCEL, MANUEL RAMON RODRIGUEZ, RAUL MANUEL COUTO, JUAN ANDRES DI CIANCIA, JOSE PASCUAL PRAT, VICTOR EUSEBIO GONZALEZ, RAMON WAINGORTIN, FRANCISCO GOMEZ, MANUEL ERLICH y OSCAR ANTONIO LOPEZ.

La entidad del epígrafe como también las personas físicas inculcadas en el sumario prevenido por Resolución N° 530/93 ( fs. 969 sub fs. 888/890) señores: RAUL MANUEL COUTO, JOSE PASCUAL PRAT, MANUEL RAMON RODRIGUEZ, VICTOR EUSEBIO GONZALEZ, NESTOR CLAUDIO PORCEL, ALEJANDRO ERNESTO LAUREANO LAURENCE, LUIS FERNANDO POSSE, MANUEL ERLICH, MIGUEL CARLOS BLANCO, OSCAR ANTONIO LOPEZ, NORBERTO RAUL AGULLEIRO MOREIRA, LUIS JORGE GONZALEZ, FRANCISCO GOMEZ y CARLOS ALBERTO CATTANEO.

V. Las notificaciones efectuadas, vistas conferidas, descargos presentados y documentación agregada por los sumariados que obran a fs. 812/ 940.

VI. La partidas de defunción de fs. 841/2 y fs. 933/4 que acreditan los fallecimientos de los señores RAMON WAINGORTIN y FRANCISCO GOMEZ.

VII. El auto de fs. 941/43 que dispuso con fecha 30.11.94 la apertura a prueba del sumario ordenado por Resolución N° 191/89 ( 808/810); las notificaciones cursadas, las diligencias producidas y la documentación e información agregadas en consecuencia (fs. 944/969).



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

VIII. El auto de fs. 969 sub fs. 1099/1100 que dispuso con fecha 03.03.98 la apertura a prueba del sumario ordenado por Resolución N° 530/93 ( fs. 969 sub fs. 888/890); las notificaciones cursadas, las diligencias producidas y la documentación e información agregadas en consecuencia ( fs. 969 sub fs 1101/1114)

IX. El auto del 24.08.98 (fs. 969 sub fs. 1.115) que dispuso la agregación del Sumario Financiero N° 816- Expediente N° 105.911/87 caratulado "BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A." al Sumario N° 627- Expediente N° 101.549/83, caratulado "BANCO CREDITO LINIERS S.A.".

X. El auto interlocutorio del 05.10.98 que cerró el periodo probatorio (fs. 971/2), sus respectivas notificaciones, vistas conferidas y documentación agregada (conf. fs. 973/85 y 987/93) y los alegatos presentados a fs. 986 sub fs. 1/8 y fs. 994 sub fs. 1/10, y

CONSIDERANDO:

I. Que previo al análisis del caso de autos procede efectuar algunas consideraciones acerca de las imputaciones efectuadas.

1. Que, en el Informe de fs. 795/807 se analizaron los elementos configurativos de las infracciones objeto de reproche, que se examinarán para determinar su alcance y valor probatorio.

Que, el Informe N° 711/1699, de fecha 9.12.83 (fs. 1/16) y sus planillas anexas (fs. 52/4), da cuenta del resultado de la Orden de Inspección N° 16/83 realizada en la entidad antecesora del actual Banco Liniers Sudamericano S.A.(entonces Crédito Liniers S.A. Compañía Financiera), con fecha de estudio al 31.12.82.

2. Que con relación al cargo A) -**Incumplimiento de los requisitos mínimos de control interno sobre operaciones crediticias con personas vinculadas con la entidad e incorrecta integración de las Fórms. 3519 y 3827**- corresponde señalar que en el mismo se determinó que la firma IVA S.A.C.I.F.I. deudora de la citada entidad, estaba vinculada a la misma por intermedio del señor Manuel Erlich (síndico titular), quien poseía poder amplio de administración, teniendo además la atribución de solicitar créditos ante las entidades financieras según surge del poder obrante a fs. 55/63. La entidad no dejó -oportunamente- expresa constancia de tal vinculación, como lo exige la normativa aplicable.(fs. 795/6 y 717).

Tal circunstancia ha sido constatada por la inspección actuante en los legajos de créditos al 31.12.82; como así también ha sido reconocida por la propia entidad en su nota de respuesta a esta institución, quien expresa a fs. 723, punto I a) "...dicha firma otorgó a favor de los señores Manuel Erlich ... poder especial para que... representen a la empresa (...hemos procedido a incluirla en la nómina de empresas vinculadas ..."



101549/33



*Banco Central de la República Argentina*

Como consecuencia de lo expuesto, no fue correctamente integrada la fórmula 3519- Distribución del Crédito por Cliente -, la cual adolecía de otras falencias:

-Se omitió informar 5 créditos en gestión judicial, que debieron incluirse: Calandra; Trubiano Yolanda; Helo; Laurino y Ramos- fs. 137. El monto de los mismos asciende a \$a 372,3 miles (fs. 11).

-Se informaron erróneamente los montos de 11 créditos en gestión judicial, cuyos titulares eran: Aiello Juan; Salgueiro Simón; Padrós Emilio; Gomary Muebles; Lucas Federico; Carusso Miguel J.; Calli José; Vava Gerardo; Amorosi Alfredo A.; Aaron Roberto y García José -fs. 138 -.

-Se informaron créditos como pertenecientes a las firmas Amibra S.A. y Belenky Julio S.A., cuando en realidad parte de los importes correspondían a deudas individuales de integrantes de las sociedades (préstamos otorgados a presidentes de dichas entidades- conf. fs. 135/6-).

-La inspección determinó que se omitió informar de 2 deudores: Intecmet y Gontade. Para más se puntualiza la incobrabilidad del crédito de Gontade ( conf. fs. 165/6) y errores en la calificación de garantías y declaración de vinculaciones (fs. 11 y 796).

Todos los errores detectados por la inspección en cuanto a la forma de declarar en sus estados contables las garantías que tenían a su favor, así como el hecho de que la entidad no tenía conocimiento de que 5 deudores se hallaban en gestión judicial, motivaron que se originaran informaciones incorrectas en la Fórmula 3827 "Estado de Situación de Deudores" (fs. 718 y 797 cits.).

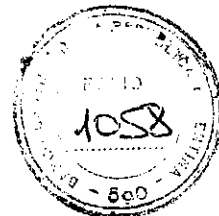
Apontoca tales asertos la respuesta de la entidad de fs. 726 y 729, al memorando de inspección, de la que se desprende un reconocimiento de su parte de la comisión de los hechos infraccionales descriptos. Así, en ese orden de ideas, expresa a fs. 726 que "...por habérselos incorporado erróneamente en la transcripción a planillas que se confeccionaran manualmente ...Los respectivos saldos de los citados prestatarios ya han sido reintegrados a esa Institución...Los pagos efectuados en exceso por cancelaciones ...se deben a una interpretación errónea de la disposición normativa por parte del personal afectado a la realización de la tarea ...".

Por otra parte y respecto de la Fórmula 3519 cabe puntualizar lo expuesto por la entidad a fs. 729 que "... Las discrepancias habidas tienen su origen en la cantidad de operaciones ...Nuestro plan de desarrollo en materia de procesos computarizados contemplaba un sistema diseñado para dicho fin, pero...no se pudo concretar su ejecución...hemos adoptado los recaudos para evitar observaciones como las formuladas".

Que, en consecuencia, resultaron acreditados los hechos que sustentan y dan (por constituido el cargo A), teniéndose por incumplidas las prescripciones de la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo y por las Comunicaciones "A" 49, OPRAC -I, Capítulo I,



101 33



*Banco Central de la República Argentina*

punto 4.4.2. y "A" 103, CONAU-1-17, C. Régimen informativo contable mensual, Instrucciones para la integración del cuadro "Estado de situación de deudores" y D. Régimen Informativo para el control interno del B.C.R.A. trimestral / anual. Distribución del crédito por cliente, Normas de procedimiento.

3. Que, con relación al cargo B)- **Incorrecta aplicación de recursos provenientes de recuperación de cartera afectada al "Préstamo Básico" y al "Préstamo Adicional"**-corresponde señalar que al realizarse el análisis de la cartera de préstamos, se constató que entre los meses de agosto y octubre de 1982 se aplicaron recursos originados en la recuperación de cartera afectada al "Préstamo Básico" y al "Préstamo Adicional" en el otorgamiento de cinco créditos de \$a 50.000 cada uno, detallados a fs. 722: Zulema L. Ibarbia, "Matibe" de Rodriguez y Cía. Sociedad Colectiva, Monfal S.A. (vinculados a la entidad), Manejo S.A. y Eraco S.A. Tales préstamos fueron otorgados dentro del régimen de la Comunicación "A" 177, que exigía que los prestatarios sean personas dedicadas a actividades agropecuarias o mineras o a la industria manufacturera o de la construcción (fs. 797).

Empero, la entidad no cumplimentó los requisitos fijados por dicha circular, por cuanto las actividades que denunciaban los beneficiarios de esa asistencia financiera, no estaban demostradas a través de las informaciones contenidas en sus balances y manifestaciones de bienes, tal como surge de fs. 722. Estos desvíos adquieren mayor importancia por tratarse de titulares, en su mayoría, vinculados.

Por otra parte, no constaban en los legajos de los clientes, los comprobantes de inversiones que demostraran que los fondos solicitados hubieran tenido la aplicación denunciada por los deudores, al momento de suscribir las solicitudes de crédito (fs. 717).

Las firmas Eraco S.A., Monfal S.A. y "Matibe" de Rodriguez y Cía. Sociedad Colectiva declararon como actividad "construcción", pero ninguna de ellas acompañó su inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, ni surge que hubieran desarrollado esa actividad. En cuanto a la firma Zulema L. Ibarbia, declaró como actividad la de productora de leche, en tanto que la firma Manejo S.A. si bien declararon desarrollar actividad agropecuaria del estudio del balance al 31.12.81 no surgen que desarrollen las actividades declaradas (fs. 722).

De allí los incumplimientos normativos señalados a fs. 797/8 de los que se desprende la incorrecta liquidación de los préstamos (fs. 797/8). En otras palabras, de haber mediado el previo análisis requerido se hubiera evitado la incorrecta aplicación de los fondos.

Cabe poner de resalto, que las anomalías resultaron acreditadas a través de la respuesta de la entidad de fs. 723/6 de la cual se evidencia un implícito reconocimiento de la comisión de los hechos infraccionales.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

En tal sentido manifiesta a fs. 726 que "... debemos expresarles que ello no se ha cumplimentado en razón de no conocer disposición normativa específica que así lo requiera. Empero, si para esa Institución el criterio vigente es el indicado, procederemos a completar dicha documentación."

Que en consecuencia, se encuentran comprobados los hechos que sustentan la imputación y se tiene por acreditado el cargo **B)**, referido, en contravención a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículo 28 inciso d) y a las Comunicaciones "A" 144, REMON 1-22, Punto IV, y "A" 177, REMON 1-42.

4. Que, con relación al cargo **C)-Incorrecta liquidación de operaciones crediticias**-cabe observar, que se determinó que estaban incorrectamente liquidadas tres operaciones de préstamos por sistema ajustable, según lo establecido por la Comunicación "A" 185 ( Nros.10.116-000551/4 de Nicolás Horaceck, 10.216-000021/6 de Luciano R. Allegretti y 10.216-000301 de Juan C. Cocca), cuando por los contratos de mutuo correspondientes debieron realizarse a tasa variable (Comunicación "A" 144) para el límite de "Clientela General" (fs.719 y 799)

Procede resaltar que la propia entidad reconoció los hechos infraccionales en la nota de fs. 141 y 730 en su contestación al memorando de Inspección con fecha de estudio al 31.12.82, al expresar que "...el alta informada al computador fue hecha utilizando el código del sistema ajustable en vez del correspondiente al del sistema variable. La situación de los créditos citados fue regularizada, conforme le comunicáramos a la Comisión actuante por nota del 6 de Junio ..."

Que, en consecuencia, resultan acreditados los hechos que sustentan el cargo **C)** teniéndose por infringidas la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículo 30, inciso c) y la Comunicación "A" 144, REMON 1-22, punto I, subpunto 7.

5. Que, con relación al cargo **D)- Incumplimiento de las disposiciones sobre el Préstamo Consolidado e incorrecta integración de la Fórmula 3885**-señálase, que en la confección de la Fórmula 3885 (Préstamo Consolidado- Determinación y movimiento de fondos), se comprobó que no fueron detraídos para la determinación del monto a percibir por "Préstamo Consolidado", las sumas adeudadas por los clientes en Gestión Judicial, percibiendo así esa institución indebidamente del Banco Central, un mayor importe del que hubiera correspondido (fs. 717 punto II).

Es decir, que las sumas adeudadas por los clientes en gestión judicial : Alberto J. Di Marco, Salvador Pontoriero, Adolfo Batista Daverio, Antonio González y Tomás Santiago Falcone; no habían sido deducidas para la determinación del monto a percibir por "Préstamo Consolidado". Así, la entidad percibió indebidamente del Banco Central un importe mayor al que correspondía, ya que recibió \$a 24.705.800 frente a los \$a 24.467.900 reales - diferencia \$a 237.900 de más- (fs. 799).





Banco Central de la República Argentina

101542



Que, dicha situación, queda corroborada con la Fórmula 1429 de fs. 131, que fuera entregada a pedido de la inspección.

Que, en su presentación de fs. 726, la propia entidad inculpada reconoce la existencia objetiva de las irregularidades observadas y expresa que "...Los clientes en gestión judicial mencionados fueron incluidos ...por habérselos incorporado erróneamente en la transcripción a planillas que se confeccionaron manualmente..."

Que, en consecuencia, por las precedentes consideraciones, se tiene por acreditado el cargo **D)**, en violación a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo y a las Comunicaciones "A" 243, REMON 1-70, punto 2°, subpunto 2°, "A" 244, REMON 1-71, Anexo II, Cronograma de cancelación del Préstamo Consolidado, punto 4, y "A" 249, REMON 1-73, Anexo I, Instrucción para la integración de la Fórmula Préstamo Consolidado, Determinación y movimientos de fondos.

6. Que, respecto al cargo **E)- Incorrecta aplicación de fondos obtenidos por el régimen de la Comunicación "A" 22, mediando incumplimiento del detalle de créditos refinanciados por el citado régimen y constitución de hipoteca sobre bien propio sin previa autorización del Banco Central** -cabe destacar con fecha 2.7.81 que la entidad recibió \$a 400.000 a través de un préstamo otorgado por la entidad financiera vinculada "Credito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles". Los fondos de dicho crédito interfinanciero provenían del B.C.R.A. por intermedio del régimen de refinanciación establecido por la Comunicación "A" 22 ; dicho monto fue utilizado para la adquisición de un inmueble de uso propio, ubicado en Esmeralda N° 33/53 de esta Capital. (fs. 800). Asimismo la entidad constituyó una hipoteca en primer grado sobre el inmueble en cuestión sin tener para ello la previa autorización del Banco Central, contraviniendo las disposiciones del artículo 28 inciso b) de la Ley N° 21.526. Por otro lado, con fecha 10.7.81 y 24.7.81 la compañía financiera transfirió a la sociedad vinculada "Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles" cupos adjudicados por el mismo régimen de la Comunicación "A" 22 por un total de \$a 404.600, cancelando así la operación anterior.

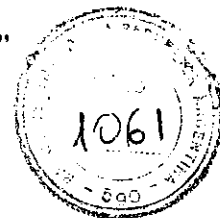
Las cifras recibidas por ambas entidades son casi similares, por lo que puede inferirse que la existencia de estos préstamos cruzados tuvo por finalidad dificultar el control del destino dado a los fondos (fs. 800).

La inspección solicitó a la entidad el detalle de los créditos refinanciados u otorgados por el Régimen de la Comunicación "A" 22, contestando no haber confeccionado dicho detalle, por lo que también se violó la Comunicación "A" 26.

De lo expuesto precedentemente, se deduce que la entidad receptora *no dió cumplimiento estricto a las pautas establecidas en lo atinente al destino a dar a los fondos recibidos, ya que los mismos fueron afectados al otorgamiento de un préstamo a otra entidad financiera - vinculada-*.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

Que, en efecto, **la entidad utilizó en su provecho los fondos de la Comunicación "A" 22 que recibió.** Para que no resultara tan evidente la maniobra que se llevaba a cabo se recurrió al ardid de trasladar los recursos a Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles quien se los devuelve a la entidad a través de un préstamo hipotecario bajo los términos de la Comunicación "A" 22, para la compra del edificio de su sucursal centro (fs. 747).

Los préstamos otorgados entre entidades, mediante la aplicación de fondos recibidos de esta Institución por el régimen de la citada comunicación, deben ser empleados por la entidad receptora con las mismas exigencias con las que los había recibido la otra entidad, es decir, debiendo aplicarlos en un 85% a la refinanciación de créditos pertenecientes a clientes que se dediquen a la producción primaria o a la industria manufacturera (fs. 800).

Que, el apartamiento normativo analizado había sido observado por la inspección del 17.5.83 (fs. 745/8), Memorando N° 11 del 7.8.83 (fs. 781).

Que, consecuentemente, atento a todo lo expuesto, corresponde tener por acreditado el cargo **E)** en contravención a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículos 28 inciso b) y 36, primer párrafo, y las Comunicaciones "A" 22, REMON 1-1, puntos 4.2. y 4.5. y "A" 26, REMON 1-4.

**7. Que, referente al cargo F)- Carencia de antecedentes en los legajos de los prestatarios e inadecuada ponderación del riesgo crediticio-**cabe señalar, que la inspección actuante constató que los legajos de los prestatarios eran incompletos y adolecían de diversas fallas.

Que, a raíz de la verificación practicada por los funcionarios de este Ente Rector se constató, que la política de crédito implementada por la entidad sumariada no fue la adecuada, por cuanto al otorgar créditos, incluso los personales (sistema de tarjetas de crédito) a sus principales clientes no ponderó adecuadamente el patrimonio ni la capacidad de pago, resultando las cuotas excesivas frente a los ingresos de los mismos y ocasionando la consiguiente morosidad en el pago.

Que, en efecto, a raíz de las tareas desarrolladas, la instancia preventora constató que gran parte de los legajos de préstamos personales analizados de los créditos prendarios (\$a 413,3 miles) y personales (\$a 20.772,2 miles), adolecían de diversas fallas: ingresos de deudores no suficientemente acreditados; patrimonios declarados no demostrados; ausencia de manifestaciones de bienes; relaciones excesivas entre los importes de las cuotas y los ingresos de los deudores (fs.4).

Que, en tal sentido, se aprecia oportuno señalar los problemas existentes por tal motivo en las refinanciaciones acordadas a usuarios de tarjetas de crédito Argencard y Mastercard, advirtiéndose graves problemas de cobro, ya que a los pocos meses de los (acuerdos muchos de esos clientes pasaron a ser morosos (fs.801/2).



*Banco Central de la República Argentina*

Que, asimismo se detectaron en la instrumentación del otorgamiento de los préstamos las siguientes observaciones: los préstamos otorgados mediante caución de certificados no aclaraban en el respectivo mutuo en forma fehaciente, la fecha de vencimiento del préstamo; tanto en los créditos con garantía hipotecaria como en los de caución de certificados, los legajos de los deudores no contenían más elementos que las declaraciones juradas suscriptas por los mismos. En el caso del prestatario Naymark, la cuota inicial representaba el 62,5% de los ingresos declarados por el mismo (fs. 7/8).

Por otro lado, se notó en todos los casos, que no constaban en los legajos de los clientes, los comprobantes de inversiones que demostraron que los fondos solicitados hayan tenido la aplicación denunciada por los deudores y falta de actualización de datos en los legajos. (fs. 717 y 720).

Que, al respecto, procede recordar que el precepto consagrado en el punto 3.1. Cap. I. de la Comunicación "A" 49 (OPRAC-1) aunque no detalla en forma taxativa los componentes con que debe integrarse un legajo, establece claramente que debe contener: "...los elementos mínimos indispensables que posibiliten efectuar correctas evaluaciones acerca del patrimonio, ingresos, rentabilidad empresarial o del proyecto a financiar".

Que, las deficiencias observadas fueron admitidas por la entidad sumariada mediante nota de fs. 145 al expresar que "...les informamos que desde hace varios meses hemos venido adoptando medidas tendientes a lograr un manejo más ajustado de las financiaciones que se acuerdan a usuarios de tarjetas de crédito...las recomendaciones apuntadas merecerán nuestra mayor atención en el futuro...". Mediante sus presentaciones de fs. 726 y 731 (en respuesta al memorando de Inspección del 31.12.82), en tal sentido manifiesta que "...si para esa Institución el criterio vigente es el indicado, procederemos a completar dicha documentación...les informamos que hemos adoptado recaudos para que los datos de los legajos de los prestatarios se actualicen en los casos en que sea necesario".

Que, en consecuencia, se encuentran comprobados los hechos que sustentan la imputación y se tiene por acreditado el cargo F) referido, en transgresión a la Comunicación "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, punto 1, subpuntos 1.6. y 1.7., y punto 3, sub punto 3.1.

8. Que, respecto al cargo G)- **Incorrectas registraciones contables**- resáltase, que como resultado del arqueo efectuado al 15.3.83 por la inspección actuante se detectó que los saldos diarios de las distintas líneas de créditos que se informaban en las contabilidades de cada una de las casas de la entidad se encontraban distorsionados, en razón de que las amortizaciones que efectuaban los clientes eran contabilizadas en la filial que recibía el pago, considerándolo en todos los casos como préstamo propio, haciéndose abstracción de la sucursal que había otorgado el mismo (fs. 719).

Que, en efecto, sobre los préstamos personales a tasa fija, surgió una diferencia de \$a 47.077,68 por no haber sido dados de baja en el mayor analítico los saldos correspondientes a préstamos cancelados entre el 1.3 y el 15.3.83. Por la incorrecta contabilización de las cobranzas de dichos préstamos por parte de las sucursales, los saldos



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

que se reflejaban no eran reales, ya que había una disminución de la subcuenta préstamos de la sucursal cobradora y no quedaba contabilizada la cancelación por parte de la sucursal otorgante (fs. 802).

Que, las deficiencias observadas fueron admitidas por la entidad sumariada mediante la nota de fs. 159 al expresar que "...Siguiendo lo aconsejado por ustedes, a partir de la fecha hemos procedido a variar la contabilización ..." y la contestación de fs. 730 al memorando de Inspección del 31.12.82, al expresar que "... se comenzaron a imputar diariamente las cobranzas que recibe cada sucursal a las subcuentas de las sucursales emisoras de los correspondientes préstamos".

Que, en virtud de diversas denuncias anónimas presentadas ante este Banco Central (fs. 200/3) respecto de la existencia de diversa documentación de la entidad que no estaba registrada oficialmente y que se hallaba en un inmueble sito en Ramón L. Falcón 7078, de Capital Federal, la inspección procedió a visitar dicho lugar (inmueble declarado por la entidad como de uso propio). Allí se localizó, entre otra documentación, recibos firmados por empleados de la entidad (fs. 206/373), determinándose que correspondían a la percepción de haberes en concepto de horas extras, sin haberse efectuado las correspondientes retenciones y aportes, situación denunciada de inmediato por la inspección a los organismos correspondientes (fs. 480/3).

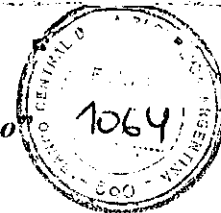
Que, en tal sentido, se verificó la incorrecta contabilización de los sueldos abonados al personal en concepto de horas extras, que fueron imputados indebidamente en las cuentas "Servicios al Personal y Gastos Sistemas Argencard", cuando hubiera correspondido jurnalizar en gastos de administración "Remuneraciones". Con motivo de esa errónea declaración contable no se hicieron los aportes a los organismos previsionales de los importes correspondientes (fs. 719).

Que, por otra parte, como resultado de la investigación efectuada, se constató la falta de contabilización de garantías -avales- que respaldaban operaciones crediticias (fs. 381/94):

Cabe poner de resalto, que las anomalías se acreditan a través de la respuesta de la entidad de fs. 730, de la que se evidencia un implícito reconocimiento de aquélla en la comisión de los hechos infraccionales habiendo tomado nota de los mismos.

En tal sentido manifiesta a fs. 730 cit. que "... Ya fueron depositados los aportes a los respectivos organismos previsionales...".

Que, en consecuencia, se encuentran comprobados los hechos que sustentan la imputación y se tiene por acreditado el cargo G) referido, en transgresión a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y por la Comunicación "A" 7, CONAU-1, Normas Contables para las Entidades Financieras, A. Plan de Cuentas Mínimo, puntos 1.1 y 1.8. y Manual de Cuentas, códigos 130.000 -Préstamos-, 131.700 -Sector privado no financiero-, 131.731 -Personales-, 560.003 -Remuneraciones-, 560.006 -Cargas sociales sobre



*Banco Central de la República Argentina*

remuneraciones-, 560.015 -Servicios al personal-, 711.025 -Otras garantías recibidas- y 721.029 -Otorgantes de garantías-.

9. Que, con referencia al cargo **H) -Controles mínimos a cargo del Directorio**, cabe resaltar, que la inspección actuante verificó que los controles a cargo del Directorio, no se cumplían con la periodicidad y alcance que las normas exigen, encontrándose los mismos delegados en los auditores externos (fs. 9).

A su vez procede resaltar que la propia entidad reconoció los hechos infraccionales en el párrafo segundo de su contestación de fs. 731 al memorando de Inspección del 31.12.82, al expresar que: "...hemos adoptado los recaudos para que se cumplan con la periodicidad y alcance que la Circular I.F. 135 requiere".

Que, en consecuencia, y frente a la actitud de la entidad sumariada, queda acreditado el cargo **H)**, en violación a lo previsto por la Circular I.F. 135.

El período infraccional de los hechos analizados anteriormente se ubicarían entre 1981 a marzo de 1983.

Sentado todo lo expuesto, se pasarán a analizar a continuación las imputaciones formuladas por el Sumario instruido a fs. 969 sub fs. 888/890.

10. Que, con respecto al cargo **1)-Inadecuada ponderación del riesgo crediticio, mediando legajos de clientes incompletos y suministro de información distorsionada al B.C.R.A.-**señálase, que en el Informe N° 064/FF/023-92 de fs. 969 sub fs. 871/80 se analizaron los elementos configurativos del mismo, los que procede también evaluar para determinar su alcance y valor probatorio.

Que, los Informes Nros. 761/542, de fecha 21.12.87 (fs. 969 sub fs. 3/24) y 761/475, de fecha 12.10.89 ( fs. 969 sub fs. 473/82 ) dan cuenta del resultado de la Orden de Inspección N° 95/87 y una Verificación parcial N° 41/89 realizadas en la entidad, con fechas de estudio al 30.6.87 y 11.8.89 respectivamente.

Que, los hechos constitutivos del cargo sub-examen fueron advertidos por la inspección actuante a raíz del análisis de la cartera de créditos del banco inculcado, constatando la existencia de legajos de deudores incompletos.

Que, sobre el particular, destácase que en determinados casos habían presentado balances sin que la firma del Contador Público fuese certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los prestatarios: Luis Fariña S.A.; El Canastero S.A.; Algodonera Santa Fé S.A.; Hogarfin S.A.; Scioli S.A.; Bruckman Hnos. S.A.; Frig. Rioplatense S.A. y Román Marítima S.A. (fs.969 sub fs. 6).



101549/33



*Banco Central de la República Argentina*

Que, además, las firmas Frigorífico Rioplatense S.A., Wire S.A. y Panizza Automotores S.A. no informaron sus deudas en el conjunto de entidades financieras (fs. 969 sub fs. 6/7).

Que, la carencia, en los legajos de los clientes analizados resulta abarcadora tanto, de la información necesaria para establecer el grado de cobrabilidad de sus deudas (conforme con su situación económica financiera), como así también, la falta de otros elementos que debían contener de acuerdo con la normativa vigente a los efectos de evaluar correctamente la capacidad de pago de los mismos.

Que, al respecto, procede recordar que el precepto consagrado en el punto 3.1., Cap. I de la Comunicación "A" 49 (OPRAC-1) aunque no detalle en forma taxativa los componentes con que debe integrarse un legajo, establece claramente que debe contener: "...los elementos mínimos indispensables que posibiliten efectuar correctas evaluaciones acerca del patrimonio, ingresos, rentabilidad empresarial o del proyecto a financiar", lo cual no acarrea ninguna duda acerca de cuándo un legajo no reúne los requisitos previstos en la aludida norma.

Que, como resultado de las tareas de inspección llevadas a cabo, la instancia preventora verificó numerosas irregularidades al practicarse un análisis integral de la Fórmula 3519, al 30.6.87, con respecto a 27 deudores y en relación con la información sobre saldos y/o garantías y código de situación proporcionada por la entidad y se omitió declarar a deudores que, por la magnitud de sus deudas, hubiera correspondido incluir en la fórmula. Estas deficiencias se observaron también en la Fórmula 3827 a igual fecha ( fs. 969 sub fs. 872).

Que, además la inspección actuante practicó un muestreo de los deudores incluidos en la Fórmula 3519 al 30.9.87 y observó que se habían cometido similares transgresiones con respecto al período anterior. (fs. 969 sub fs. 872 cit.).

Que, en tal sentido, se aprecia oportuno señalar, que el estudio de la situación de los deudores debe contemplar primordialmente la capacidad de pago de los mismos. Sin perjuicio de ello, las entidades financieras deben practicar un análisis exhaustivo del valor de las garantías ofrecidas por sus clientes a los efectos de determinar, previamente, y en oportunidad de su ofrecimiento, si las mismas cubrirán suficientemente, en caso de ejecución, los eventuales saldos impagos.

Que, del detalle de fs. 969 sub fs. 44 surge, respecto de la situación de los deudores del segmento analizado, que las deudas de varios clientes que el banco sumariado informó a este Banco Central como en "situación normal" debieron ser declaradas como "con atrasos" o "con riesgo de insolvencia". Así también, se observa, respecto de lo consignado por la encartada sobre las garantías recibidas, diferencias significativas con lo detectado por la inspección actuante (así, en varios casos se verificó que deudas que no estaban garantizadas se consignaron "con garantías", ver fs. 969 sub fs. 42/4) presentándose, de esta manera, un estado de conformación de su cartera más favorable del que en realidad le correspondía,



101549/83

*Banco Central de la República Argentina*

circunstancia que pone de manifiesto el suministro de información distorsionada que, precisamente, se le reprocha.

Que, dicha situación, fue puesta en conocimiento de la entidad encartada, a través del Memorando de conclusiones que luce a fs. 969 sub fs. 88/96 (ver en especial fs. 969 sub fs. 89, punto 1.2. y sub fs. 90/1, puntos 4, 5 y 6).

Sobre las anomalías detectadas, se aprecia un reconocimiento de la entidad. Al respecto a fs. 969 sub fs. 140 expresa, respecto del prestatario "Frigorífico San Luis Muruaga Hnos. S.A." que: "...Hemos convenido con el cliente la constitución de una hipoteca para garantizar la deuda mencionada...." y a fs. 969 sub fs. 141 manifiesta que: "...Se han tomado las medidas para no reiterar el error ...Asimismo les informamos que se han establecido circuitos de información y control sobre los saldos de deuda, garantías y situación de los clientes del banco, a efectos de evitar errores en la confección de las futuras informaciones a enviar al Banco Central....Se han impartido instrucciones a los efectos de mejorar el control de la documentación incorporada a los legajos de crédito y asegurar el cumplimiento futuro de las disposiciones vigentes."

*Que, el apartamiento normativo analizado había sido observado por una inspección anterior (ver fs. 969 sub fs. 6, párrafo 6to.), lo cual constituye una circunstancia agravante de la irregularidad objeto de reproche.*

Que por lo expuesto, repútanse comprobados los hechos que sustentan y dan por constituida la imputación que aquí nos ocupa, teniéndose por acreditado el cargo 1), en transgresión a la Ley N° 21.526, artículos 30, inc. b) y 36, primera parte; a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo 1, puntos 1.7. y 3.1.; "A" 467, OPRAC-1-33, Anexo, punto 6.1.; "A" 612, OPRAC-1-57, Anexo, punto 2°, y a la Circular CONAU-1, C. Régimen informativo contable mensual. Instrucciones para la integración del cuadro "Estado de situación de Deudores" y D. Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral /anual. Distribución del crédito por cliente. 3. Normas de procedimiento.

Que, el período infraccional se halla comprendido entre el 30.6.87 y el 26.4.88 (fs. 969 sub fs. 872).

11. Que, con relación al cargo 2)- **Insuficiente constitución de provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos**-cabe considerar que la cartera estudiada (A 8.944.566) representaba el 55% de la cartera total de préstamos al 30.6.87. De su análisis y en base al informe de abogados sobre la totalidad de la cartera en gestión judicial y quiebra, se estimaron provisiones con deudas actualizadas al 30.9.87 por A 2.183.919, que representaban el 12% de su R.P.C. a igual fecha, motivo por el cual las provisiones constituidas por el Banco de A 310.162, sin imputación específica, resultaron insuficientes. El incremento que debía registrarse de A 1.873.757 representaba el 10,45% de la R.P.C. al 30.9.87 (fs. 969 sub fs. 20).



101548/83



*Banco Central de la República Argentina*

Que, dicha situación, fue puesta en conocimiento de la entidad encartada, a través del memorando de conclusiones que luce a fs. 969 sub fs. 89/96 y señalándole que debía incrementar las previsiones (fs. 969 sub fs. 89, punto 1.). La entidad sólo previsionó algunos de los créditos referenciados o un porcentaje de los mismos.

Que, asimismo, a raíz del Informe del Equipo de Asuntos Especiales de fs. 969 sub fs. 158/9 y fs. 969 sub fs. 191/6 mediante Nota de fs. 969 sub fs. 202/3, se le reiteró a la entidad encartada que debía incrementar las previsiones y proceder a la registración contable de las mismas.

Que, la entidad bancaria en estudio mediante notas de fs. 969 sub fs. 207/8 y fs. 969 sub fs. 213/15 brindó explicaciones respecto de las observaciones efectuadas por la inspección.

Que, los extremos apuntados por el banco, incoado a través de las presentaciones citadas ut-supra no hacen más que confirmar la existencia de las anomalías objeto de reproche.

Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, resáltase, que la corrección, por parte de la entidad sumariada, de las irregularidades verificadas por los funcionarios de esta Institución (al constituir las previsiones indicadas) no la liberan de su responsabilidad por los hechos observados.

Que, a raíz de la verificación practicada, se constató, que la política de crédito implementada no fue la adecuada, por cuanto al otorgar créditos a sus principales clientes no ponderó adecuadamente el patrimonio ni la capacidad de pago de los mismos.

Que, consecuentemente, atento a todo lo expuesto, corresponde tener por acreditado el cargo 2) referido, en violación a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y a la Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131.901 - Previsión por riesgo de incobrabilidad - y 530.000 -Cargo por incobrabilidad

La conducta infraccional se comprobó al 30.9.87 y subsistió hasta el 2.12.88 (fs 969 sub fs. 874 )

12. Que, en lo que hace al cargo 3) **-Cobro de comisiones u otros cargos adicionales a los intereses-** cabe destacar, que se constató que al acordar créditos la entidad había cobrado comisiones que encarecían artificialmente los costos, en franca colisión con la Com. "A" 49, Cap. II, punto 1.5. ; "A" 372; "A" 476, punto 2; "B" 1388 y "A" 979. Así, y a modo de ejemplo, los conceptos invocados eran:

- Consulta a asesores legales, relacionadas con la instrumentación de operaciones.
- Preparación, seguimiento e instrumentación de garantías recibidas.
- Análisis de balances.





101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

- Solicitud de informes sobre solicitantes de préstamos personales y prendarios o firmantes de documentos descontados.
- Verificación de títulos y documentación aportada por clientes, pedido de inhibiciones, certificado de dominio, tasaciones, etc. (fs. 969 sub fs. 90).

Que, las anomalías se acreditan, a través de la respuesta de la entidad de fs. 969 sub fs. 141, al memorando de inspección, en la que se evidencia un reconocimiento de aquélla en la comisión de los hechos infraccionales.

En tal sentido manifiesta a fs. 969 sub fs. 141 cit. que "...Se han reiterado instrucciones a los responsables del Area Comercial a efectos de mantener el estricto cumplimiento de las normas dictadas por el BCRA en materia de comisiones ...".

Que, en consecuencia, resultan acreditados los hechos que sustentan y dan por constituido el cargo 3), en violación a la Ley N° 21.526, artículo 30, inciso c), y a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo II, punto 1.5. y "A" 476, OPRAC-1-34, punto 2°.

Estos hechos se verificaron desde el 1.6.87 hasta el 30.9.87 (fs. 969 sub fs. 874).

13. Que, con referencia al cargo 4) **-Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen del efectivo mínimo-** cabe apuntar, que se procedió a realizar el análisis de las posiciones de efectivo mínimo correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 1987 (fs. 969 sub fs. 874/5). Del estudio efectuado a fs. 969 sub fs. 875 han surgido, respecto del banco que nos ocupa los siguientes desvíos:

- Se detectaron diferencias en la cuenta 321.155 -Retenciones a Terceros- por no haberse incluido como partida sujeta a exigencia el impuesto a los ingresos brutos a clientes de la entidad -fs. 969 sub fs. 8, punto 2, apartado a)-.
- Para el mes de julio no se tomó como partida sujeta a exigencia, los saldos acreedores de la cuenta 311.745 -"Transferencias"- correspondientes a los días 7, 22 y 23 del citado mes -fs. 969 sub fs. 8, punto 2, apartado b)-.
- Inconvenientes en el sistema de cuentas corrientes originados por modificaciones en el proceso de captura de datos, lo que llevó a tomar los saldos "no contables" como válidos para la confección del efectivo mínimo -fs. 969 sub fs. 8/9, punto 2, apartado c)-.

En el mes de julio de 1987, los listados contables contenían saldos muy superiores a los no contables, por lo que se consideró necesario que la entidad contara con un dictamen de su auditoría externa que emitiera opinión acerca de la razonabilidad de las cifras (declaradas por el banco en la Fórmula 3000 como promedio de depósitos en cuentas corrientes- fs. 969 sub fs.9-.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

A raíz de los desvíos observados, luego de una revisión de las fórmulas que abarcaban el periodo en cuestión y de acuerdo con lo indicado en el memorando de conclusiones con fecha de estudio al 30.6.87 (fs. 969 sub fs. 91), la entidad procedió a modificar la posición de efectivo mínimo del mes de julio de 1987 (fs. 969 sub fs. 150/2 y fs. 969 sub fs. 160/1)

Las deficiencias observadas fueron admitidas por la entidad sumariada mediante nota de fs. 969 sub fs. 142, punto 7 donde expresa que "...A partir de entonces se ordenó a los sectores involucrados abocarse a la conciliación y regularización de las diferencias lo que se logró al cabo de un extenso periodo de trabajo... hemos procedido a rectificar la posición de efectivo mínimo..."

Que, con referencia al cargo 4), se incumplieron las disposiciones de la Ley N° 21.526, artículos 31 y 36, primer párrafo, y de la Comunicación "A" 10. REMON-1, Capítulo I y sus modificatorias.

La situación infraccional referida se detectó en julio/87 y subsistió hasta abril/88 (fs. 969 sub fs. 875).

14. Que, con relación al cargo 5)- **Desvíos en el régimen de moneda en custodia**- refiérese, que como resultado de la investigación efectuada, la inspección actuante pudo comprobar que la entidad durante los meses de agosto, setiembre y octubre/87 declaró frecuentemente excedentes de efectivo en la Fórmula 3486 y en el mismo día solicitaban, para retirar al día siguiente, importes similares a los declarados.

La entidad, en su respuesta manifiesta que el esquema de manejo de dinero puesto a disposición del Banco Central respondía a sus necesidades operativas que habitualmente no son posibles de satisfacer con el servicio de caudales, ya sea entre las sucursales o hacia y desde el Banco Central u otras entidades financieras y que el importante movimiento de Cámara que tiene el banco le exigía dar la mayor cobertura posible a su cuenta corriente en el B.C.R.A. y simultáneamente contar durante el día con el efectivo necesario para atender operaciones de caja ( fs. 969 sub fs. 401).

Que, asimismo del arqueo de moneda en custodia efectuado por funcionarios del B.C.R.A. el 22.10.87, se constató un saldo de A 3.250.000, en tanto que en la Sucursal Centro ubicada en Esmeralda 33 sólo se recontaron A 2.850.000. El resto de los fondos, según acta labrada al Tesorero de dicha Sucursal se encontraban diseminados en distintas sucursales (fs. 969 sub fs. 420).

Que, a raíz de la verificación practicada por los inspectores de este Ente Rector se infiere que su conducta configuró una política seguida hasta que se detectó.

Que, sobre el particular, destácase, que la Comunicación "A"2- CIRMO -1, Cap. V, puntos 1.2., 2.2.1. y 4.1. establece que las entidades, respecto de los billetes en "buen



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

uso", separarán el necesario para sus operaciones y el excedente, si lo hubiere, será depositado o puesto a disposición del Banco Central, así como concentrar la moneda en custodia a favor del B.C.R.A. en la sucursal ubicada en el radio céntrico de la Capital Federal (fs. 969 sub fs.420/1).

Que, en efecto, la operatoria desarrollada por el Banco con relación a la moneda en custodia desvirtúa el régimen de la Circular mencionada ut-supra, ya que esta norma aclara que las entidades deben separar el numerario necesario para sus operaciones del excedente si lo hubiere, del que no pueden disponer -una vez que se haya depositado o puesto a disposición del B.C.R.A. (fs. 969 sub fs. 876).

En ese orden de ideas, se desprendería un implícito reconocimiento de la entidad al expresar a fs. 969 sub fs. 145 que "...hemos procedido a implantar el criterio sustentado por la referida Inspección".

Que, en consecuencia, resultan acreditados los hechos que sustentan el cargo 5), teniéndose por transgredidas las disposiciones de la Comunicación "A" 2, CIRMO-1, Capítulo V, puntos 1.2. y 2.2.1.

Que, el período infraccional se ubica en los meses de agosto, setiembre y octubre de 1987 (fs. 969 sub fs. 876).

15. Que, respecto del cargo 6)- **Irregularidades en cuenta corriente bancaria**- señálase que, de la verificación parcial N° 41/89, iniciada el 8.6.89 (fs. 969 sub fs. 476/7), pudo comprobarse la existencia de irregularidades en el manejo de la cuenta corriente N° 999002406 a nombre de Comprecoop.

*Al analizarse en Sucursal Flores los legajos de cuentas ctes. se visualizaron cheques de CICA S.A., a favor de Fernando Vallejo S.A., depositados en la cta. cte. N° 999002406. Solicitado el extracto de la misma, se estableció que pertenecía a Comprecoop (abierta el 28.9.88 y cerrada el 20.4.89 en Casa Matriz) y que el volumen de movimientos, así como las sumas involucradas, eran de gran importancia.*

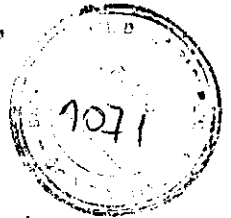
Cabe destacar que se visualizaron cheques librados sobre la cuenta referida, por sumas muy significativas cuyos beneficiarios eran -entre otros- funcionarios de la Mesa de Dinero del Banco y de inversionistas.

Asimismo se estableció la existencia de débitos practicados en la precitada cuenta que carecían de firma libradora y de las instrucciones no surge claramente el beneficiario ni el concepto por las que se emitieron.

El tratamiento de la cuenta corriente de Comprecoop era particularmente "diferencial", se detectó que del 15.2.89 al 10.4.89 (55 días corridos ) se registró un (descubierto en la misma, sin que existiera acuerdo ni legajo de crédito. La gran mayoría de los cheques emitidos eran cursados por Cámara, ingresaban en la de 24 horas, pese a la radicación



101543/83



*Banco Central de la República Argentina*

de la cuenta en Casa Matriz (Liniers) aunque la mayoría de los débitos y créditos correspondían a operaciones efectuadas en otra filial.

Cabe señalar la constatación de un presunto fraude cometido por el ex-gerente de la citada sucursal Flores, Sr. Carlos Cattáneo quien habría efectuado operaciones de intermediación marginal, de acuerdo a las siguientes operatorias:

- a) Recompra de cupones de comercios adheridos a tarjetas de crédito mediante la entrega de los mismos conjuntamente con un cheque firmado "en blanco", en función del cual y a través de la Mesa de Dinero, se adelantaban los fondos a los beneficiarios.
- b) Compra de cheques posdatados.
- c) Operatoria marginal en moneda extranjera utilizando formularios de numeración doble y posteriormente se suprimían directamente operaciones al fin del día o se realizaban sin integrar comprobante alguno tomando nota en planilla borrador.
- d) Existencia de certificados de depósito a plazo fijo a nombre de personas inexistentes "utilizando" el nombre de empleados del banco, a cuyo vencimiento se cobraban mediante firmas apócrifas, constituidos con los sobrantes de "cajas negras" manejadas por la mesa de dinero, teniendo como contrapartida "remesas" (aunque este dinero nunca ingresaba a la sucursal).
- e) Existencia de cajas de ahorro con titulares presuntamente inexistentes -que se utilizaban para canalizar utilidades de operatorias marginales - (conf. fs. 969 sub fs. 473/4 y 476).

Que, además las observaciones reprochadas fueron señaladas a la entidad y la misma no brindó respuestas satisfactorias (ver fs. 969 sub fs. 492).

*Que, la irregularidad objeto de análisis, se halla agravada por tratarse de un desvío normativo que ya había sido observado por inspecciones anteriores (fs. 969 sub fs. 492 cit.).*

Que, en consecuencia, se encuentran comprobados los hechos que sustentan la imputación y se tiene por acreditado el cargo 6) referido, en violación a las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, punto 3.2.1., segundo párrafo, y "A" 837, CAMCO-1-17, Capítulo II, punto 1.2.1

La conducta infraccional se registró desde el 28.9.88 hasta el 24.4.89 (fs. 969 sub fs. 877).



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

16. Que, con referencia al cargo 7)- **Incumplimiento de los controles mínimos a cargo del Directorio** -destácase, que de la revisión de los papeles de trabajo de la entidad inculpada respaldatorios del cumplimiento de los controles dispuestos por la Circular "B" 682 de este Banco Central, correspondientes al período comprendido entre los meses de noviembre de 1986 y agosto de 1987, se verificó que:

- No se habían efectuado arqueos de efectivo y otros valores en la sucursal de Mar del Plata.
- Sólo se practicó parcialmente el control de los extractos de cuentas y certificaciones de saldos con otros bancos, adelantos transitorios en cuentas corrientes y valores comprados.
- No se realizó el control de documentos en cartera, valores de terceros al cobro, en custodia o en garantía.
- En los trimestres finalizados en enero y julio/87 no fueron recontados los plazos fijos (OPASI-1, Capítulo I, punto 3.1.7.).
- No se había practicado el control del saldo de las cuentas "Sucursales y Agencias", "Casa Central" y "Casa Matriz".
- No constaba la realización de los controles de los registros contables y de otros rubros activos y pasivos (fs. 969 sub fs. 877).

Que, las irregularidades observadas, fueron puestas en conocimiento del banco inculcado, mediante el Memorando de Conclusiones que luce a fs. 969 sub fs. 92/3, punto 8.2.1. y Anexo de fs. 969 sub fs. 117).

Que, el reconocimiento de los incumplimientos objetos de reproche por parte de la entidad encartada surge de fs. 969 sub fs. 144, punto 4. donde expresa que "...se han impartido instrucciones a la Gerencia de Auditoría y Organización de la entidad, a los efectos de vigilar el estricto cumplimiento de los controles mínimos a cargo del Directorio...".

*Que, además destácase, que la inspección anterior también había advertido la inobservancia de los controles establecidos por la normativa citada ( ver fs. 969 sub fs. 12 y fs. 969 sub fs. 92 "in fine"), lo cual constituye una circunstancia agravante.*

Que, por todo lo expuesto, se tiene por probado el cargo 7), transgrediendo lo normado por la Circular "B" 682, Anexo, puntos 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.4. y 1.2.5. y Comunicación "A" 59, OPASI-1, Capítulo I, punto 3.1.7.

Que, el período infraccional se registra desde el mes de noviembre/86 hasta el (26 de abril de 1988 (fs. 969 sub fs. 878).



*Banco Central de la República Argentina*

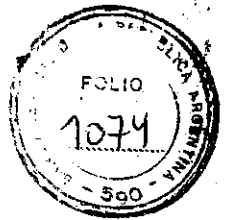
17. Que, respecto al cargo 8) **-Incumplimiento de las normas sobre auditorías externas-** corresponde individualizarlo en la persona del Contador Norberto Raúl Agulleiro Moreira perteneciente al Estudio Harteneck, López y Cía. (Auditor Externo de la entidad). Cabe apuntar que de la verificación practicada surge que el inculso transgredió las disposiciones sobre procedimientos mínimos de auditoría externa establecidos por la normativa aplicable (ver sobre el particular fs. 969 sub fs. 878):

- Prueba sustantiva B.13: No se revisó con la profundidad debida el saldo de las deudas de los clientes informados en la Fórmula 3519, ya que en los papeles de trabajo mencionan un solo cliente con saldo mal declarado, mientras que la inspección determinó 27 casos similares.
- Prueba sustantiva B.14: Tampoco se analizó debidamente el cumplimiento de la Comunicación "A" 979.
- Prueba sustantiva B.17: No se revisaron los saldos pendientes por operaciones de cámara compensadora.
- Prueba sustantiva B.23: No se cotejaron los movimientos de bienes de uso con la documentación respaldatoria.
- Prueba sustantiva B.42: No se efectuó con la extensión que requería el análisis de partidas sujetas a efectivo mínimo; ello fue reconocido expresamente por el auditor a fs. 969 sub fs. 133.
- Prueba sustantiva B.51: No se detectó la falta de toma de conocimiento por parte del Directorio del memorando de control interno que la auditoría remitió el 22.12.86.

Se comprobó para el cierre del ejercicio económico (31.10.86) y balance trimestral (31.7.87) que varios de los controles practicados no contaban con la suficiente documentación de respaldo o no se evidenciaba la misma.

Procede resaltar que el auditor externo ha evidenciado un implícito reconocimiento de los hechos infraccionales en algunos casos y en los restantes no acreditó el correcto cumplimiento de las disposiciones relativas a auditorías externas (fs. 969 sub fs. 120/1; fs. 969 sub fs. 127/35; fs. 969 sub fs. 163/5; fs. 969 sub fs. 172/3 y fs. 969 sub fs. 193).

Que, la inspección actuante constató la carencia de antecedentes y/o documentación adecuada y suficiente (respaldatoria del relevamiento y evaluación del sistema existente de control interno de la entidad) y, por ende, verificó, la falta de profundidad de los procedimientos de control llevados a cabo por el sumariado, todo ello en violación a lo establecido por la Circular CONAU-1 y complementarias que reglamentan la actuación de las (auditorías externas).



*Banco Central de la República Argentina*

Que, en su mérito, se tiene por acreditado el cargo 8) referido al desempeño como auditor externo del Contador Norberto Raúl Agulleiro Moreira, en transgresión a la Circular CONAU-1, Normas Mínimas sobre auditorías externas, Anexo III, puntos I y II B., pruebas sustantivas B. 13, B. 14, B. 17, B. 23, B. 42, B. 49 y B. 51.

Las infracciones surgen de la revisión de los ejercicios anual al 31.10.86 y trimestral al 31.7.87 (fs. 969 sub fs. 879).

18. Con lo expuesto se ha completado el análisis y ponderación de las diversas imputaciones base de estas actuaciones sumariales, quedando acreditados los cargos A), B), C), D), E), F), G), H), 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) conforme se ha desarrollado a lo largo del presente considerando I.

Que, consecuentemente, corresponde evaluar la atribución de responsabilidades a las personas sumariadas, por los cargos que se encuentran probados, teniendo en cuenta, especialmente, respecto a las personas físicas, los periodos de actuación dentro de los lapsos en que se verificaron los hechos reprochados.

II. La persona jurídica sumariada en estos autos, **BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A.**

Sobre el particular corresponde señalar que, de acuerdo con la autorización que oportunamente se le confirió, Crédito Liniers S.A. Compañía Financiera concretó la fusión por absorción de Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u Otros Inmuebles y, simultáneamente, inició el 1.11.84 sus actividades como banco comercial, bajo la denominación de Banco Crédito Liniers S.A. (ver sobre el particular Comunicación "B" 1339 del 6.11.84- fs. 793 y fs. 969 sub fs. 1109, sub fs. 3-).

Al respecto corresponde puntualizar que de conformidad al compromiso de fusión suscrito entre ambas entidades (fs. 952, sub fs. 3 y 5/7) y a la Resolución N° 442, del 17.11.83 del H. Directorio de este B.C.R.A., punto 5., "...La entidad incorporante deberá asumir las obligaciones que eventualmente pudieran afectar a la entidad incorporada, por los cargos y reajustes que determine este Banco Central, originados en el incumplimiento de las regulaciones contenidas en las Leyes N° 21.526... Asimismo responderá con igual alcance por las sanciones previstas en el artículo 41, inc. 3) de la Ley N° 21.526, a que se hiciera pasible la entidad absorbida, en virtud de los sumarios en instrucción o que se resuelva instruir por infracciones a las mencionadas disposiciones legales, sus normas reglamentarias o resoluciones dictadas por esta Institución..."(conf. fs. 952, sub fs. 10).

Asimismo, por escritura de fecha 20.07.88 se documentó el cambio de denominación por el de Banco Liniers Sociedad Anónima (conf. fs. 969, sub fs. 1109, sub fs. 3 vta.



101549/83

*Banco Central de la República Argentina*

Finalmente, y por Informe Nº 579/1294 Autorización de Entidades Financieras informa que la sociedad cambia su denominación por la actual Banco Liniers Sudamericano S.A. -Comunicación "B" 4957 del 18.06.92 (conf. fs: 997 sub fs. 2).

Que, deviene procedente analizar la eventual responsabilidad del banco inculcado.

*Que, a esta altura de lo expuesto, corresponde analizar los argumentos vertidos por la entidad en examen, tendientes a excluir su responsabilidad en los actuados.*

Sobre el particular procede puntualizar que los implicados presentan, a lo largo de las actuaciones, los planteos defensistas que lucen incorporados a fs. 856/73; fs. 969, subfojas 949/72 y fs. 994, subfojas 1/10.

Que para una mayor claridad expositiva se pasarán a considerar los mismos en el orden precedente.

Con ajuste a ello, es del caso analizar los extremos invocados a fs. 857/vta. por los cuales se pretende enervar los cargos formulados en razón de pretendida, la relativa validez que denotarían las "conformidades" prestadas por la entidad a los apartamientos advertidos al momento de notificar las observaciones de la inspección.

Al respecto, y en prieta síntesis, señala la defensa que dichas conformidades o reconocimientos a los apartamientos señalados habrían estado motivados en la intención de la entidad de obtener la aprobación de la fusión y transformación perseguidos.

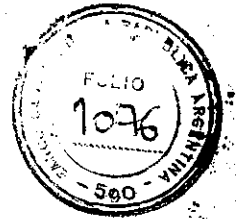
No cabe menos que desestimar -de plano- tales apreciaciones habida cuenta que el trámite en cuestión procede reputarlo independiente del análisis que -por cuerda separada, y ante otro sector de esta entidad- se estaba desarrollando.

Por otra parte, baste recordar que a la fecha señalada, no se hallaba concluido el trámite dispuesto por la normativa aplicable al trámite de los sumarios financieros dispuesto por la Ley Nro. 21.526 y normativa concordante. Pretender lo contrario llevaría de suyo un implícito desconocimiento de la normativa financiera.

De allí que resulte absolutamente desatinado vincular el trámite de autorización apuntado con la suerte de la tramitación de un expediente por el que a la postre se resolviera abrir sumario pero que a esa fecha aún no se encontraba instruido. Repárese que la autorización de mentas, según apunta el mismo letrado defensor a fojas 856 vta. data del 17 de noviembre de 1.983, en tanto que conforme es dable advertir de fojas 795/807, recién por Informe del 29.12.88 se contó con definiciones concluyentes sobre los virtuales apartamientos hasta ese momento estudiados.

( En otras palabras, ni siquiera forzosamente podrían vincularse ambas cuestiones toda vez que -conforme lo expuesto- la resolución adoptada en estos autos (véase





*Banco Central de la República Argentina*

101549/83

sobre el particular fojas 808/10) quedó plasmada por Resolución Nro. 191 del 23.02.89, es decir, seis años después del pretendido trámite que se pretende vincular.

Por idénticas apreciaciones corresponde rechazar las pretendidas justificaciones esgrimidas a fojas 857 vta. a las que "brevitatis causae" se remite

En otro orden de ideas, se agravia la implicada e interpone planteo de prescripción de los actuados a fs. 858/859 vta.; fs. 969 sub fs. 949/72 y 994 sub fs. 1/10, correspondiendo adelantar -a su respecto- la falta de asidero del planteo introducido.

Al respecto, y conforme a lo establecido por el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 (párrafo sexto): "La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se operará a los seis (6) años de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario....". En tal sentido, destácase, que la configuración de las irregularidades detectadas- que se le imputan a la inculpada- subsistieron hasta el 24.04.89 (fecha de culminación del ilícito enrostrado en el cargo 6 del Informe Nro. 064/FF/023-92, ver fs. 969, subfojas 877) resultando que la totalidad de las restantes infracciones aquí estudiadas se ubican temporalmente con anterioridad al mismo.

Sentado ello, y teniendo presente que la resolución que dispusiera oportunamente la instrucción del sumario data del día 27.07.93 (fs. 969, subfs. 888/90) cabe concluir que a la fecha del dictado del citado decisorio la acción que expresa la pretensión punitiva del estado se encontraba vigente en todos sus términos por no haber transcurrido el plazo máximo de seis años fijado por la normativa aplicable.

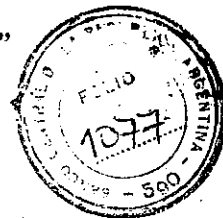
A mayor abundamiento, resulta oportuno reseñar que cronológicamente, y contrariamente a lo sostenido por la defensa, por la Resolución N° 191, de fecha 23.2.89, obrante a fs. 808/10 y por la Resolución N° 530, de fecha 27.7.93, obrante a fs. 969 sub fs. 888/90, se dispuso la apertura del sumario con marcada anticipación a la fecha en que se hubiese operado la prescripción de la acción emergente de las infracciones reprochadas, resultando, asimismo, estos últimos actos mencionados (Resoluciones Nros. 191/89 y 530/93 cits.) interruptivos de la aludida prescripción de la acción, tal como surge del texto legal precedentemente citado.

Tal criterio interpretativo se encuentra arreglado a lo resuelto por la Alzada (conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala I, sentencia del 7.10.80, autos "ABERG COBO, Martín Antonio c/Resolución 314/78 del Banco Central"), e igualmente lo hacen todas las posteriores diligencias sumariales (Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo del 02.12.76, in re "Compañía Azucarera Ingenio Amalia S.A." y Dictamen del Procurador General de la Nación).

Todavía mas.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

Sobre este particular la jurisprudencia ha tenido oportunidad de expedirse, sosteniendo que *"...el acto administrativo tiene vida jurídica independiente de su notificación. Esta tiene que ver con la vinculación o sujeción del particular al acto, mas no con su existencia"* (Hutchinson, T., L.N.P.A. comentada, Ed. Astrea, T. 1. pág. 229, párr.1º). Asimismo, ha dicho el Alto Tribunal que *constituyen actos de impulso procesal que interrumpen el curso de la prescripción, entre otros, la providencia que dispone instruir sumario y corre vista a la defensa. (Fallos: 296:531)". (Sentencia del 19/2 98 dictada en autos: "Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resolución 154/94". Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala Contencioso Administrativa N° 2).*

Respecto de la solicitud del encartado de que se resuelva este planteo como excepción de previo y especial pronunciamiento, es de indicar que a tenor de lo establecido por las normas procesales propias, Circular RUNOR-1, Comunicación "A" 90, punto 1.2.2.9.1., *"...las excepciones opuestas por los prevenidos son decididas en la resolución final..."*.

Pero eso no es todo. En su defensa (fs. 856/73 y fs. 969 sub fs. 949/72) el Banco sumariado insiste con su planteo de **prescripción** de la acción, efectuando consideraciones respecto de la fecha de la notificación recibida; pretendiendo fundar dicha interpretación en lo dispuesto por el artículo 42, y por los puntos 1.2.2.2.1. y 1.2.2.2.2. de la Circular RUNOR-1 Capítulo XVII.

En cuanto a la excepción de prescripción, como de previo y especial pronunciamiento, cabe reiterar que la **Circular RUNOR-1, Capítulo XVII** - norma de procedimiento aplicable al trámite de los sumarios - establece en su punto 1.2.2.9.1 que *"Las excepciones opuestas por los prevenidos, son decididas en la resolución final, salvo cuando por su naturaleza resulte necesario considerarlas y resolverlas con anterioridad..."*

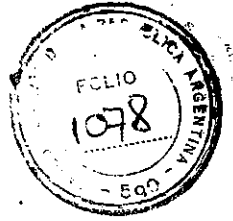
Al respecto se remarca que el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras establece que el sumario se instruirá con sujeción a las normas de procedimiento que establezca el Banco Central de la República Argentina y que en la exposición de motivos de la Ley N° 21.526, Título I -Capítulo II, Autoridad de aplicación, se aclara que el Banco Central de la República Argentina *"tiene facultades exclusivas e indelegables en lo que se refiere a la aplicación de la presente Ley y a la reglamentación de la misma -entre otras -..."*

Adentrándonos en la inteligencia del descargo incorporado a fs. 856/73 procede, practicar algunas consideraciones atinentes a las cuestiones ventiladas a fs. 859 vta./871.

Siguiendo el orden expositivo allí plasmado, y en relación a lo expresado a fs. 859 vta. con respecto al cargo primero -nominado a los fines del presente como cargo "A"- formulado a fs. 795/7, se plantea respecto de lo obrado con la firma IVA S.A.C.I.F.I. que los (préstamos en cuestión, que fueron dos, datan de 1.982 por lo cual -a su entender- la infracción se hallaría prescripta.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

A su respecto es menester reparar, conforme se explicitara "ut supra", que no le asiste razón teniendo presente que el ilícito enrostrado forma parte de un conjunto de infracciones imputadas oportunamente, de lo que se desprende que la fecha de comisión del mismo integra un período infraccional que se extiende sucesivamente hasta el 24.04.89 (conf. fs. 969, subfojas 877).

Por otra parte, y en lo atinente a las consideraciones subsidiarias vertidas a fs. 859 vta./860 el encartado manifiesta que "...puede haberse informado erróneamente...", agregando a fs. 861 que: "...es evidente que se trata de errores materiales respecto de la formalidad a cumplir, ...y que fueran oportunamente corregidas..." agregando más adelante que: "...es evidente que se trata de errores materiales...y que fueran oportunamente corregidas..." lo que conlleva un implícito reconocimiento de la incorrecta integración de las fórmulas en cuestión aquí tratadas.

Pasando a evaluar lo argumentado a fs. 861 vta. y sgtes. (vinculado con el cargo 2, que fuera nominado en el presente como cargo B) caben idénticas conclusiones a las expresadas en el cargo anterior en orden a la evaluación del instituto de la prescripción.

En lo referente a las cuestiones de fondo introducidas, cabe recordar lo expresado por la inspección a fs. 722, teniéndose por reproducidas íntegramente las evaluaciones allí formuladas.

En punto a analizar lo esgrimido respecto del cargo 3 (que se identificara "supra" como cargo "C") a fs. 863 vta./864, la inculpada reconoce haber incumplido la normativa aplicable al manifestar que: "...este evidente error material fue corregido en cuanto fue advertido por la inspección...se trata de una equivocación sin trascendencia...máxime cuando ante la evidencia del error el mismo es rápidamente corregido..." todo lo cual importa validar lo señalado en la pieza acusatoria que se pretende desvirtuar.

A su turno, la encartada efectúa apreciaciones en alusión al cargo 4 (identificado en esta resolución como cargo "D") poniendo de manifiesto que: "...la situación fue prontamente regularizada..." (fs.864), "...las infracciones descriptas en el punto b) del cargo 4 fueron cometidas por error...las consecuencias de dichos errores fueron reparadas tan pronto los mismos fueron detectados..." (fs. 864 vta.), lo que exime de mayores comentarios en cuanto al reconocimiento de parte.

Al referirse al cargo 5 (equivalente al cargo "E" del presente) arguye que: "...La entidad no ha negado haber tomado fondos correspondientes a la Com. "A" 22 y haberlos transferido a Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda..." (fs. 864 vta./865) resultando suficientemente ilustrativo el análisis practicado oportunamente en autos por el cual (quedaran acreditados los apartamientos.



101549/83

"2.000-Año del Turismo"

*Banco Central de la República Argentina*

Con arreglo a ello se resalta que con fecha 2.7.81 la entidad recibió \$a 400.000 a través de un préstamo hipotecario otorgado por la entidad financiera vinculada "Crédito Liniers S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles"; los fondos de dicho crédito interfinanciero provenían del B.C.R.A. por intermedio del régimen de refinanciación establecido por la Comunicación "A" 22; dicho monto fue utilizado para la adquisición de un inmueble de uso propio, ubicado en Esmeralda N° 33/53 de esta Capital, según surge de los antecedentes de fs. 745/88. Cabe recordar que los préstamos otorgados entre entidades, mediante la aplicación de fondos recibidos de esta Institución por el régimen de la citada Comunicación, deben ser empleados por la entidad receptora con las mismas exigencias con las que las había recibido la otra entidad, es decir, debiendo aplicarlos en un 85% a la refinanciación de créditos pertenecientes a clientes que se dediquen a la producción primaria o a la industria manufacturera.

En otro orden de ideas, al turno de justipreciar lo apuntado a fs. 867 por la defensa, en lo atinente al cargo 6 (al que se nominara como cargo "F") merece destacarse que la misma expresa que: "...la ponderación del riesgo crediticio no fue tan inadecuada..."

En suma, las argumentaciones vertidas a su respecto a fs. 867/vta. no enervan ni modifican la verificada circunstancia que se señalara a fs. 801 en donde se concluye que los legajos de los prestatarios eran incompletos y adolecían de diversas fallas.

Apontoca tal aserto, el reconocimiento vertido a fs. 726 (primer párrafo), 731 (primer párrafo) y 145.

Siguiendo la secuencia, al considerar la temática del cargo 7 (Letra "G") la encartada explícita a fs. 868 que "...la diferencia producida en la Casa Matriz y detectada por el arqueo es atribuible al sistema de contabilización de las cobranzas de estos préstamos. Este sistema permitía el pago de estos préstamos en cualquier sucursal, siendo irrelevante cuál lo había acordado. Durante el mes calendario, las cobranzas se contabilizaban en la sucursal que efectivamente la percibía, sin reflejo alguno en la sucursal otorgante y produciéndose consecuentemente diferencias en el análisis de las sucursales individualmente consideradas..."

En cuanto a lo referido a fs. 868 vta. debe señalarse que la intervención de este Ente Rector se limitó a poner en conocimiento de los Organismos competentes los virtuales apartamientos, quedando a cargo de éstos la investigación y, en su caso, la sanción de los mismos.

Al abordar el cargo 8 (Letra "H") se desprende un implícito reconocimiento del actuar infraccional al explicar a fs. 871 que "...puedan haberse producido desajustes de organización administrativa y, eventualmente de control...está evidenciado por su rápida corrección...los problemas...fueron corregidos...rápidamente..."

A fs. 969 sub fs. 952 vta./4, punto III y fs. 994, se plantea por la defensa la nulidad arguyendo que la garantía de defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, determina la necesidad de que la acusación o intimación contenga, por



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

un lado, la descripción de los hechos imputados y, por el otro, la atribución de tales hechos al sujeto pasivo de la imputación, con la consecuente explicación de las circunstancias, motivos o razones en que aquélla se funda.

Que, con respecto a la nulidad por supuesta falta de descripción de los hechos imputados y de atribución de tales hechos al sujeto pasivo de la imputación, cabe expresar que los cargos oportunamente formulados hallan fundamento en concretas constancias y como corolario de la tarea de inspección desarrollada a lo largo de las actuaciones; describiendo las conductas infraccionales y citando las normas violadas en cada caso.

Que en lo que hace al planteo efectuado, sus manifestaciones no resultan acertadas, por cuanto no sólo de los informes sino también de las resoluciones de apertura sumarial surge que las transgresiones imputadas han sido descriptas con sus hechos configurantes; se han citado expresamente las disposiciones eventualmente violadas y el material que sirve de soporte a tales argumentaciones. De tal modo que los autos acusatorios revisten suficiente entidad para expresar la pretensión punitiva del estado, lo cual inclina a rechazar el planteo introducido.

Por otra parte, mediante las resoluciones de apertura de sumario se encuadra jurídicamente la conducta reprochable y se individualiza a las personas imputadas, integrándose las mismas con los informes de cargos antecedentes -expresamente citados en aquéllas- en los cuales se describe en forma analítica y pormenorizada cuáles son los hechos imputados y su calificación legal, y quiénes son los responsables.

De tal forma, reunidos todos los elementos que permiten establecer cuáles son los ilícitos atribuidos y quiénes los acusados, cabe afirmar que el derecho de defensa, reconocido por nuestra Constitución Nacional se encuentra suficientemente garantizado, careciendo, por ende, de asidero la afirmación en contrario de los encartados. Prueba de ello, lo constituyen los extensos escritos de defensa de cuyos términos no surge que haya existido dificultad alguna en identificar y detallar los apartamientos imputados y las personas involucradas.

Por lo dicho cabe concluir que el derecho de defensa en ningún momento se encontró vulnerado.

Que, asimismo y no advirtiéndose la existencia de vicios que pudieran afectar la validez de las resoluciones impugnadas, procede desestimar de plano el planteo de nulidad intentado.

Que, ante todo, resáltase, que la entidad, en oportunidad de presentar su defensa, con relación a los cargos que se le imputan, (ver nota de fs. 723/36 y fs. 969 sub fs. 140/6) -en general- reconoció haber practicado correcciones de conformidad a las observaciones que le formulara la inspección interviniente.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

Que, en razón de lo señalado precedentemente, resulta evidente que las alegaciones formuladas por la inculpada con posterioridad al reconocimiento aludido constituyen meros ensayos defensistas encaminados a colocarse en una mejor situación procesal.

Que, con relación a la cuestión de fondo, la entidad a través de sus presentaciones de fs. 969 sub fs. 949/72 y fs. 994 sub fs. 1/10, efectúa una serie de cuestionamientos encaminados a demostrar la inexistencia de las irregularidades reprochadas, atacando los fundamentos fáctico-normativos de las incriminaciones de autos, advirtiéndose, que la misma, en su afán por demostrar su inocencia resalta, la forma en la cual se llevaron a cabo las maniobras irregulares que se imputan y que, precisamente, se le reprochan, pretendiendo, además obtener la absolución a través de la invocación de circunstancias que se reducirían, a su entender, a deficiencias formales, a operaciones aisladas carentes de significación y a errores en la interpretación de las normas aplicables.

Que, a mayor abundamiento, corresponde señalar que la encartada, al aceptar actuar como una entidad financiera autorizada por este Banco Central, también aceptó voluntariamente la sujeción a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, y por lo tanto, la posibilidad de ser sancionada en los términos del artículo 41 de dicha normativa frente al eventual incumplimiento de las normas de este Banco Central.

Que, la prueba documental propuesta por la defensa del banco a fs. 873 vta. y fs. 969 sub fs. 971 vta., no revisten entidad suficiente para desvirtuar las indubias probanzas existentes en las actuaciones sumariales.

Que, con relación al caso **federal** planteado (ver fs. 872 y fs. 969 sub fs. 971) no corresponde a esta instancia expedirse sobre el mismo.

Asimismo, y sobre la cuestión de fondo procede remarcar que las normas dictadas por el Banco Central reglamentando el funcionamiento de la actividad financiera deben ser cumplidas acabadamente por las entidades comprendidas en el sistema financiero. Por ello la infracción se encuentra consumada cuando una inspección verifica el incumplimiento, aunque después la entidad inspeccionada corrija su conducta, tal como lo hiciera en el presente, luego de haber sido ellas aceptadas.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia al establecer que: "La circunstancia de haberse subsanado las anormalidades detectadas por el B.C.R.A. en una entidad financiera no purga las irregularidades cometidas por el hecho de las operaciones realizadas en contravención a las normas." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 8.3.88, "in re" "Almagro Caja de Crédito Coop. Ltda"). En igual orden de ideas, sostuvo el mismo tribunal en la causa "Amersur Cia. Financiera S.A." del 20.5.88: "La comisión de la infracción bancaria no requiere la existencia de un daño cierto, sea a la propia institución, al B.C.R.A. o a terceros, sino que es suficiente (que el perjuicio pueda resultar potencial. La corrección posterior por parte de la entidad de las irregularidades cometidas efectuada a instancia del B.C.R.A. que las detectó a través del



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

ejercicio de su función de control, no es causal suficiente para tenerla por no cometida y exculpar de su responsabilidad."

Que, en cuanto a la supuesta carencia de solidez jurídica de la fundamentación de los cargos que se le imputan, esbozada en su presentación de fs. 856/73, fs. 969 sub fs. 949/72 y fs. 994 subfojas 1/10, cabe destacar que el sustento probatorio de los cargos formulados se puso de manifiesto en el Capítulo I de este Considerando, y aparece respaldado fundamentalmente con los elementos aportados por los funcionarios de este Ente Rector y, además fue determinado al efectuarse las imputaciones con precisa descripción de los hechos incriminados e identificación de las normas transgredidas -que imponían al banco el deber de obrar de una manera determinada -.

Que, sobre el particular, resulta ilustrativo traer a colación lo señalado por la Jurisprudencia en el sentido de que: "La actividad financiera tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de otras de carácter comercial y se caracteriza especialmente por ajustarse a las disposiciones y el control del Banco Central, una de cuyas funciones es aplicar la ley de bancos y vigilar su cumplimiento ... Asimismo, la Corte Suprema ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las llamadas "Personas" o "entidades" que menciona el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras saben de antemano que se hallan sujetas al "poder de policía bancario o financiero", en cuyo ejercicio incluso puede el legislador, sin desmedro constitucional, remitir a la reglamentación administrativa la descripción de conductas sancionables, dentro de los términos de la ley (Fallos 300; 392 y 443) conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, Causa 6611 "José O. Pastoriza S.A. Cambio, Turismo y Bolsa y otros c/ Resolución 278 del B.C.R.A. s/ apelación" Expediente N° 101.003/80, sentencia del 4.10.84.

Que los hechos configurativos de los cargos imputados se verificaron en la entidad bancaria de mentas, siendo producto de la acción u omisión de los integrantes de sus órganos representativos. Así, habida cuenta que la persona jurídica sólo puede actuar a través de los órganos que legalmente la representan, ya que, dentro de los entes ideales no puede haber otra voluntad que la expresada por las personas físicas que tienen facultades estatutarias para actuar en su nombre (Conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia del 16.10.84, Causa 2128, autos: "Bolsa de Comercio de San Juan c/ Banco Central s/ Resolución 214/81"). Por todo ello, debe concluirse que esos hechos le son atribuibles y que generan su responsabilidad en tanto contravienen las normas reglamentarias de la actividad financiera dictadas por este Banco Central en la órbita de sus facultades legales.

Que, en consecuencia, hallándose comprobados los cargos A), B), C), D), E), F), G), H), 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8) formulados, a tenor del análisis y fundamentos expuestos en la presente Resolución, cabe atribuir responsabilidad al actual Banco Liniers Sudamericano S.A. (como continuador del Banco Crédito Liniers S.A.) por las irregularidades reprochadas en estas actuaciones.



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

Consecuentemente, se pasará a examinar la situación de las personas físicas respecto de las mencionadas anomalías.

**III. En forma liminar cabe aclarar que al turno de evaluar las virtuales penalidades que pudieren corresponderles, se tomará en cuenta el período de actuación efectiva e individualmente desempeñado, por cada uno de los inculcados, como así también los agravantes de las infracciones por ellos cometidas.**

**III.1. SEÑORES: JOSE PASCUAL PRAT (director: 02.02.81 al 24.04.89); MANUEL RAMON RODRIGUEZ (vicepresidente; gerente general y director: 02.02.81 al 24.04.89); NESTOR CLAUDIO PORCEL (presidente y director: 02.02.81 al 24.04.89); ALEJANDRO ERNESTO LAUREANO LAURENCE (presidente: 31.10.88 al 24.04.89); LUIS FERNANDO POSSE (vicepresidente: 01.11.85 al 24.04.89); MIGUEL CARLOS BLANCO (síndico: 01.11.85 hasta el 24.04.89) y LUIS JORGE GONZALEZ (gerente general: 01.02.87 al 24.04.89);**

Que el análisis de las defensas presentadas por los sumariados se efectuará sin perjuicio de señalar que, por haber presentado descargos conjuntos o de adhesión a los formulados por la entidad financiera, para evitar repeticiones innecesarias, se tienen aquí por reproducidas las consideraciones y conclusiones en lo atinente a los tópicos ya tratados precedentemente.

*Así y con relación al primero de los actuados tratados (Expte. N° 101.549/83 en el cual recayera la Resolución Nro. 191 del 23.02.89 -fs. 808/10-) los sumariados Manuel Ramón Rodríguez, Néstor Claudio Porcel y José Pascual Prat, presentan un descargo conjunto a fs. 848/50, resultando que por adherirse a los fundamentos introducidos por la entidad bancaria le caben idénticas consideraciones a las ya efectuadas.*

Que, con referencia a la responsabilidad que les corresponde a los sumariados por las funciones directivas y respecto de la comisión de los hechos infraccionales, la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, por sentencia de fecha 28.04.77, en autos "VICER S.A." expresó que: "...La responsabilidad del director de una sociedad nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno cualquiera fueran las funciones que efectivamente cumple". También ha sostenido la jurisprudencia que: "...al analizar la conducta de cada uno de los integrantes del directorio debe tenerse en cuenta que aún cuando no haya intervenido directamente en los hechos imputados, tiene la obligación de controlar la totalidad de la gestión empresarial, por lo que en este sentido son responsables de la actuación de todos y recae sobre ellos una "culpa in vigilando" (conf. C.N.Com., Sala B, sentencia del 10.11.78 en autos "Co-crédito Coop. de Crédito" J.A., 1979-IV, Sínt.).

Que, asimismo, se ha expedido ella expresando que: "...las infracciones a la Ley de Entidades Financieras, pertenecen a un régimen de policía administrativa, de modo tal que la constatación de su comisión genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia





101549/83

1084

*Banco Central de la República Argentina*

exculpatoria válida (esta Sala, 13-jul-82, "Groisman"), lo que no se verifica" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, autos: "Galarza, Juan Alberto (Bco. Cooperativo Agrario Arg. Ltda.) -Sumario persona física c/ B.C.R.A. s/ Resolución 48", sentencia del 01.09.92).

En cuanto a lo que afirman sobre la necesidad de que entre un hecho punible y su autor medie un hacer culposo, causalmente relevante y que el injusto le pueda ser reprochable a dicho autor, siendo su reverso la responsabilidad objetiva, cabe destacar que, en virtud de las funciones conductivas que asumió el prevenido en una sociedad dedicada a una actividad como la financiera, esa responsabilidad se encuentra ínsita en la naturaleza de tales funciones (Conf. jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Sala I, sentencia del 18.9.84 en causa 6209 "CONTIN, Hugo Mario Giordano y otros c/Resolución N° 99/83 del Banco Central s/apelación" y sentencia del 28.9.84 en causa 2795 "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/Resol. N° 456/81 Banco Central. Instrucción de sumario a la entidad y personas físicas"; Sala II, sentencia del 6.12.84 en autos "BERBERIAN, Carlos Jacobo y otros c/Resol. N° 477 del Banco Central de la República Argentina s/ apelación art. 41 de la Ley N° 21.526- Banco Ararat"; Sala III, sentencia del 3.5.84 en causa B-1209 "Bunge Guerrico, Hugo M. c/ Resol. N° 594/77 del Banco Central "; y Sala IV, sentencia del 23.4.85 en causa 6208 "Alvarez ; Celso Juan y otros c/ Resol. N° 166 del Banco Central s/ apelación").

Sobre la naturaleza de la responsabilidad que la defensa arguye que se intenta aplicar, procede señalar que la jurisprudencia se ha expedido sobre este particular señalando que: "...No se trata de la aplicación del principio de la responsabilidad objetiva. Las infracciones han sido cometidas por el ente social y la conducta de éste no es más que la resultante de la acción de unos y de la omisión de otros dentro de sus órganos representativos..."(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV, Fallo del 23.4.85, Causa N° 6.208, Autos "Alvarez, Celso Juan y otros c/ Resolución N° 166 del Banco Central s/apelación (Expediente N° 101.167/80 Coop. Saenz Peña de Créd. Ltda.).

Además, tal como lo sostiene la jurisprudencia la alegada ausencia del elemento subjetivo en su obrar, tampoco puede erigirse en causal de exculpación ya que no discuten su actuación en la entidad durante todo el período infraccional, de donde surge su responsabilidad lo que trae aparejada las consecuencias previstas por el art. 41 de la Ley N° 21.526, en tanto se verifique una infracción a las normas vigentes, con prescindencia de los perjuicios materiales que el obrar ilícito pudiera ocasionar y de las formas de culpabilidad que se apliquen para la consumación de las irregularidades (Conf. fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dictado en autos "BANCO OBERA COOP. LTDO. s/sumario").

En sentido similar, cabe recordar que se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fallos del 28.9.84 -Sala I- Causa (2795, autos "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/ Resolución N° 456/81 Banco Central (Considerando II) y del 31.10.85 -Sala III-, causa N° 9463, autos "Argemofin Cía.



101549/83

1085

*Banco Central de la República Argentina*

Financiera s/ apelación Resolución 88/85 B.C.R.A. (Considerando VII)", dejando sentado que la responsabilidad se genera por la mera constatación de faltas, resultando indiferente la existencia de dolo, pues las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión.

Que, respecto de los argumentos defensivos esbozados por los sumariados cabe destacar que los nombrados efectúan el planteo de prescripción de la acción, respecto de la operatoria objeto de reproche, reflexiones éstas de igual tenor a las practicadas por la entidad sumariada (fs. 856/73, fs. 969 sub fs. 949/72 y fs. 994 sub fs. 1/10), por lo que cabe remitirse a lo ya señalado.

Que, a mayor abundamiento, conviene recordar el criterio sustentado por el Tribunal de Alzada que reconoce que la asignación de responsabilidad no supone necesariamente la autoría material o física de los hechos incriminados, ya que quien acepta un cargo directivo debe responder por actos en los cuales pudo no tener participación directa, pero por su función debió conocer e impedir su perpetración (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala N° 2, fallo en autos: "Muñiz Barreto, Benjamín J. s/ Recurso c/ Resolución N° 347/74 -Banco Central" del 23.11.76).

*Párrafo aparte amerita la situación del Sr. Manuel Ramón Rodríguez quien además de ocupar el cargo de vicepresidente de la entidad también era gerente general de la misma (3.2.81 - 31.5.85)- fs. 742-*

Que, procede analizar la responsabilidad que le cabe al inculcado por la función de Gerente General desempeñada en la entidad que surge de fs. 742.

Con específica referencia a su rol de gerente general, la jurisprudencia también ha tenido oportunidad de pronunciarse, cuando expresa que: "...Y si no es aceptable la excusa de un director para salvar su responsabilidad en cuanto a su falta de intervención en los actos ilícitos o irregulares, menos lo es cuando a ese cargo se anexa el de gerente general. Ello es así por cuanto los gerentes tienen facultades resolutorias en el plano operativo de la entidad, incumbencia que no puede deslindarse sin desnaturalizar la función que se ejerce, en especial, en cuanto se refiere al gerente general que "es el encargado directo de la administración general del banco" (Alfredo C. Rodríguez, Técnica y Organización Bancarias, Buenos Aires, 1980, p. 471). (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala Contencioso Administrativo N° 4, CAUSA N° 24.772: BANCO VICENTE LOPEZ COOP. LIMITADO ( en liq.) c/BCRA s/apelación-Resolución n° 283/90".

*Cabe poner de relieve las peculiaridades que presenta la comisión de las infracciones que son objeto de reproche por Resolución N° 191 del 23.02.89.*

*Así y respecto del señor Manuel Ramón Rodríguez se destaca en relación al cargo "A" su especial participación por haber suscripto la Fórmula 3.519 al 31.12.82; relacionado con el cargo "B" y el beneficio económico de la firma vinculada "Matibe" de ( Rodríguez y Cia. Sociedad Colectiva de la cual era socio administrativo, por el crédito otorgado por Comunicación "A" 177 (fs. 88/100); por el cargo "H" su especial*



101549/33



*Banco Central de la República Argentina*

*participación por tratarse de la omisión de obligaciones que le estaban directamente asignadas en su condición de miembro del directorio.*

*Con referencia al señor Néstor Claudio Porcel se pone de relieve en lo que atañe al cargo "B" el beneficio económico por el crédito cuestionado otorgado por Comunicación "A" 177 a su esposa Sra. Zulema Ibarbia de Porcel (fs. 126/30), en tanto que por el cargo "H" se pone de manifiesto su especial participación por tratarse de obligaciones que le estaban directamente asignadas en su condición de miembro del directorio.*

*Por último, la consideración de la situación del implicado José Pascual Prat no puede obviar su especial participación respecto del cargo "H" por tratarse de la omisión de obligaciones que le estaban directamente asignadas en su carácter de miembro del directorio.*

*Toca el turno de evaluar las apreciaciones efectuadas respecto de las infracciones enrostradas por Resolución N° 530 del 27.07.93 -fs. 969, subfs. 888/90-, a los señores José Pascual Prat; Manuel Ramón Rodríguez; Néstor Claudio Porcel; Alejandro Ernesto Laureano Laurence; Luis Fernando Posse; Miguel Carlos Blanco Y Luis Jorge González quienes presentan descargos comunes a fs. 969, subfs. 949/72 y fs. 994 subfs. 1/10.*

*Que con relación a lo referido a fs. 969 subfojas 949 vta./952 vta. cabe recordar el criterio jurisprudencial oportunamente señalado en el sentido que: "...el acto administrativo tiene vida jurídica independiente de su notificación. Esta tiene que ver con la vinculación o sujeción del particular al acto, mas no con su existencia " (Hutchinson, T., L.N.P.A. comentada, Ed. Astrea, T. 1. pág. 229, párr.1°). Asimismo, ha dicho el Alto Tribunal que constituyen actos de impulso procesal que interrumpen el curso de la prescripción, entre otros, la providencia que dispone instruir sumario y corre vista a la defensa. (Fallos: 296:531)". (Sentencia del 19/2.98 dictada en autos: "Banco Alas Cooperativo Limitado (en liquidación) y otros c/ Banco Central de la República Argentina. Resolución 154/94". Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala Contencioso Administrativa N° 2).*

*En cuanto a la nulidad de la pieza acusatoria endiligada a fs. 969 subfojas 952 vta./954 debe recordarse que mediante las resoluciones de apertura de sumario se encuadran jurídicamente las conductas reprochables e individualizan a las personas imputadas y las mismas se integran con los informes de cargos antecedentes -expresamente citados en aquéllas- en los cuales se describe en forma analítica y pormenorizada cuáles son los hechos imputados y su calificación legal, y quiénes son los responsables.*

*De tal forma, reunidos todos los elementos que permiten establecer cuáles son los ilícitos atribuidos y quiénes los acusados, cabe afirmar que el derecho de defensa, (reconocido por nuestra Constitución Nacional se encuentra suficientemente garantizado, careciendo, por ende, de asidero la afirmación en contrario de los encartados. Prueba de ello,*



101549/83

1087

*Banco Central de la República Argentina*

lo constituyen los extensos escritos de defensa de cuyos términos no surge que haya existido dificultad alguna en identificar y detallar los apartamentos imputados y las personas involucradas:

Que, con relación a la cuestión de fondo, los sumariados a través de sus presentaciones de fs. 969 sub fs. 949/72 y fs. 994 sub fs. 1/10, efectúan una serie de cuestionamientos encaminados a demostrar la inexistencia de las irregularidades reprochadas, atacando los fundamentos fáctico-normativos de las incriminaciones de autos, advirtiéndose, que por las mismas, en su afán por demostrar su inocencia resaltan, la forma en la cual se llevaron a cabo las maniobras irregulares que se imputan y que, precisamente, se le reprochan, pretendiendo, además obtener la absolución a través de la invocación de circunstancias que se reducirían, a su entender, a deficiencias formales, a operaciones aisladas carentes de significación y a errores en la interpretación de las normas aplicables.

En homenaje a la brevedad, cabe destacar que las observaciones señaladas fueron comunicadas al banco por medio del memorando de conclusiones de la inspección (fs. 969 subfs. 88/96 -ver en particular fs. 969 subfs. 89, punto 1:2. y fs. 969 subfs. 90/1 puntos 4., 5 y 6).

Por otra parte, y congruente con ello en su respuesta la entidad reconoció los desvíos procediendo -según lo manifestado- a regularizar las situaciones comentadas, o bien a tomar las medidas tendientes a tal fin (ver nota de fs. 969 subfs. 139/46, en particular fs. 969, subfs. 140/1, puntos 1, 2, 4, 5 y 6). En pocas palabras, se reconocieron las infracciones señaladas.

Asimismo, las normas dictadas por el Banco Central reglamentando el funcionamiento de la actividad financiera deben ser cumplidas acabadamente por las entidades comprendidas en el sistema financiero. Por ello la infracción se encuentra consumada cuando una inspección verifica el incumplimiento, aunque después la entidad inspeccionada corrija su conducta, tal como lo hiciera en el presente, luego de haber sido ellas aceptadas.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia al establecer que: "La circunstancia de haberse subsanado las anormalidades detectadas por el B.C.R.A. en una entidad financiera no purga las irregularidades cometidas por el hecho de las operaciones realizadas en contravención a las normas." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 8.3.88, "in re" "Almagro Caja de Crédito Coop. Ltda"). En igual orden de ideas, sostuvo el mismo tribunal en la causa "Amersur Cía. Financiera S.A." del 20.5.88: "La comisión de la infracción bancaria no requiere la existencia de un daño cierto, sea a la propia institución, al B.C.R.A. o a terceros, sino que es suficiente que el perjuicio pueda resultar potencial. La corrección posterior por parte de la entidad de las irregularidades cometidas efectuada a instancia del B.C.R.A. que las detectó a través del ejercicio de su función de control, no es causal suficiente para tenerla por no cometida y exculpar de su responsabilidad."



101549/83

1088

*Banco Central de la República Argentina*

Que, con relación al caso **federal** planteado (ver fs. 969 subfs. 971) se reitera que no corresponde a esta instancia expedirse sobre el mismo.

Que la situación del señor **LUIS JORGE GONZALEZ** (Gerente general: 1.2.87 - 24.04.89)- fs. 969 sub fs. 865- amerita efectuar algunos comentarios adicionales al analizar la responsabilidad que le cabe, por la función de Gerente General desempeñada en el banco sumariado.

Que, en base a tal función, el encartado ostentaba la máxima autoridad administrativa y tenía a su cargo el ámbito netamente operativo y en tal sentido la jurisprudencia ha expresado que: "... Un gerente no es un mero ejecutor de órdenes, posee autoridad suficiente para impedir la comisión de hechos antirreglamentarios en unos casos, o dejar constancia, en otros, de las desviaciones que se producían, para, si debía ceder ante una autoridad superior, salvar su responsabilidad" (Autos "Berchialla, Luis s/recurso c/Resolución N° 347/74- Banco Central", sentencia del 23.11.76); y, más recientemente, en fallo del 20.08.96, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, Causa N° 5.313/93, autos "BANCO SINDICAL S.A.-JUAN C. GALLI, ROBERTO H. GENNI C/ B.C.R.A. (RESOL.595/89)", ha dicho que "Es preciso recordar que aún cuando media en el caso una relación de dependencia, la actuación que les cabe a los gerentes asume una importancia y características singulares. Tan es así que en dichos funcionarios se delegan funciones ejecutivas de la administración y es entonces que... la ley les adjudica -justamente por la importancia de esas funciones, que en muchos casos pone en sus manos el destino de la sociedad- las mismas responsabilidades que incumben a los directores en virtud de ley no excluyendo, por ello, la responsabilidad de estos últimos."

Que, en el descargo presentado por el sumariado a fs. 969 sub fs. 949/72 y 994 sub fs. 1/10, efectúa, respecto de la operatoria objeto de reproche, reflexiones de igual tenor a las practicadas por los demás sumariados, en razón de tratarse de un mismo ofrecimiento conjunto, por lo que corresponde estar a lo dicho ut-supra.

Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad a los señores **JOSE PASCUAL PRAT; MANUEL RAMON RODRIGUEZ ; NESTOR CLAUDIO PORCEL; ALEJANDRO ERNESTO LAUREANO LAURENCE; LUIS FERNANDO POSSE ; MIGUEL CARLOS BLANCO y LUIS JORGE GONZALEZ** por los cargos del presente sumario

**III.2. SEÑORES OSCAR ANTONIO LOPEZ, RAUL MANUEL COUTO y VICTOR EUSEBIO GONZALEZ:**

Que procede efectuar un tratamiento diferenciado en relación a la situación de los inculcados citados, habida cuenta su escrito de fs. 969, subfojas 939/40 mediante el cual introducen planteo de prescripción de la acción para perseguir los ilícitos que se les enrostrarán en el presente.



101548/33

1089

*Banco Central de la República Argentina*

Sobre el particular, los encartados allegan a fs. 969, subfojas 941/5 sendas actas -con certificación notarial- de las cuales es dable advertir la desvinculación de los mismos de la entidad financiera imputada.

Del análisis de ellas se desprende que los señores Oscar Antonio López y Raúl Manuel Couto cesaron en sus funciones con fecha 24.03.87 (ver fs. 969, subfs. 943), en tanto que el señor Víctor Eusebio González dejó de intervenir el 06.04.87 (fs. 969, subfs. 944).

Que la excepción planteada debe ser resuelta a la luz de lo normado por el artículo 42° de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 que dispone en su sexto párrafo que: "...La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se operará a los seis (6) años de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario, una vez abierto por resolución del presidente del Banco Central de la República Argentina..."

Con arreglo a ello debe puntualizarse que si bien se halla probado que el cese de los mandatos de los señores Oscar Antonio López y Raúl Manuel Couto se registró el 24.03.87 (conf. fs. 969, subfs. 943 cit.) y el del señor Víctor Eusebio González se produjo el 06.04.87 (fs. 969, subfs. 944 cit.) lo que fija el tope máximo para perseguir virtuales infracciones el 24.03.93 y el 06.04.93, respectivamente; existen -y ello surge palmariamente de los actuados- infracciones cometidas con posterioridad por los mismos, como así también actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación de este sumario que operan indubiamente como causales interruptivas.

En efecto. Por Resolución N° 191 del 23.02.89 (ver fs. 808/10) se dispuso la instrucción de sumario para determinar las responsabilidades en que podrían haber incurrido como encargados de la administración y fiscalización de la entidad del epígrafe por hechos que se extendieron hasta el 15.03.83 (fs. 802).

Mediante Resolución N° 530 de fecha 27.07.93 (fs. 969, subfs. 888/90) se resolvió instruir nuevamente sumario con relación a infracciones ulteriores que se prolongaron hasta el 24.04.89 (fs. 969, subfs. 877).

De ello se sigue que no les asiste razón a los inculados toda vez que en el caso de autos se han verificado las causales legales de interrupción de la acción previstas por la normativa citada.

Del examen armónico de las fechas de comisión de las sucesivas infracciones imputadas, como asimismo las de los actos y diligencias impulsoras del procedimiento citadas cabe concluir en que la pretensión punitiva del estado se halla incólume.

Así, al sancionarse la primera de las resoluciones citadas el 23.02.89 (fs. 808/10) se produjo la interrupción del plazo prescriptivo que operaba el 15.03.89 (fs. 802), circunstancia ésta que se vuelve a repetir -respecto de los mismos sujetos- en oportunidad de



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

dictarse la Resolución N° 530 el 27.07.93 (fs. 969 subfs. 888) referida a apartamentos situados temporalmente entre noviembre de 1986 (fs. 969, subfs. 878) y el 24.04.89 (fs. 969, subfs. 877) y que, en su mérito y con ajuste al artículo 42°, prescribían el 24.04.95.

Lo obrado luego de todo ello, también se encuadra en las causales de interrupción en estudio.

Deben citarse sobre el particular los respectivos autos de apertura a prueba, diligencias que se materializaran el 30.11.94 (fs. 941/3) y el 03.03.98 (fs. 969, subfs. 1.099/1.100); la de acumulación del Sumario N° 816 (Expte. N° 105.911/87) al Sumario N° 627 (Expte. N° 101.549/83) de fecha 24.08.98 (fs. 969, subfs. 1.115) y la de clausura del periodo probatorio del 05.10.98 (fs. 971/2)

Que, por lo dicho, encontrándose vigente la acción para perseguir los ilícitos, les caben idénticas consideraciones y conclusiones a las practicadas y obtenidas con anterioridad respecto de los descargos de fs. 843/5; 848/50 y 994 subfs. 1/10, por tratarse de alegaciones efectuadas conjuntamente con otros sumariados que ya fueron objeto de tratamiento.

*Que, por lo tanto, procede atribuir responsabilidad a los señores Oscar Antonio López (consejero titular y síndico), Raúl Manuel Couto (director) y Víctor Eusebio González (director) -conforme fs. 969, subfs. 943 y 742-.*

*Respecto del señor Víctor Eusebio González se remarca, respecto del cargo "B" el beneficio económico obtenido por la firma vinculada "MONFAL S.A." de la cual era presidente (fs. 101/25), por el crédito otorgado bajo el régimen de la Circular "A" 177, destacándose al mismo tiempo su directa participación en el otorgamiento de éste y los demás créditos cuestionados en este cargo por haber suscripto en nombre de la entidad los contratos correspondientes (fs. 77/8, 86/9 y 101/2), y en relación al cargo "H" por tratarse de la omisión de obligaciones que le estaban directamente asignadas en su condición de miembro del directorio.*

*Pasando a considerar las particularidades comitivas de la infracción identificada como cargo "H" se señala referido a los señores Oscar Antonio López y Raúl Manuel Couto su especial participación habida cuenta que se trata de la omisión de obligaciones que les estaban directamente asignadas por ser miembros del directorio de la entidad inculpada.*

### III.3. SEÑOR JUAN ANDRES DI CIANCIA:

Párrafo aparte amerita el análisis de la situación del señor Juan Andrés Di Cancia, quien se desempeñara como director desde el 02.02.81 al 31.05.85 (fs. 742) respecto de quien se dispusiera la apertura sumarial por Resolución N° 191 del 23.02.89 (fs. 808/10) con relación a apartamentos registrados hasta el 15.03.83 (fs. 802).



101549/83

1091

*Banco Central de la República Argentina*

Que se estima corresponde conferir al sujeto citado idéntico tratamiento al practicado en el numeral anterior, por imperio de lo normado por el artículo 42, sexto párrafo de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

Con estricta sujeción a ello cabe concluir que el plazo de prescripción que nace de las infracciones que se le atribuyeran por Informe N° 431/239/88 (fs. 795/807) y que se extienden hasta el 15.03.83 (fs. 802) resultó interrumpido con el dictado de la Resolución N° 191 de fecha 23.02.89 (fs. 808/10), constatándose luego sucesivas interrupciones operadas por diligencias impulsoras del procedimiento, señalándose en este sentido, el auto de apertura a prueba del 30.11.94 (fs. 941/3) y el de clausura del período probatorio de fecha 05.10.98 (fs. 971/2)

Por ello, y lo dispuesto por el sexto párrafo del art. 42 de la Ley N° 21.526 se colige que la pretensión punitiva del estado también en este caso se halla a resguardo, extremo que inclina a *responsabilizar por las infracciones oportunamente enrostradas al señor Juan Andrés Di Cancia* (director de la entidad imputada), dándose por reproducidos aquí los mismos fundamentos señalados "supra" en lo atinente a las argumentaciones de fs. 925/9 y 994 subfs. 1/10 que fueran objeto de exhaustivo tratamiento.

*Se pone de relieve su especial participación en lo atinente a la comisión de la infracción nominada como cargo "H" teniendo presente para ello su condición de miembro del directorio.*

**III.4. SEÑOR CARLOS ALBERTO CATTANEO** (gerente de la Sucursal Flores ).

Que, procede analizar la responsabilidad que le cabe al inculcado en las presentes actuaciones atento haber desempeñado el cargo de gerente de la Sucursal Flores donde se habría cometido un presunto fraude en perjuicio de la entidad, consistente en el resellado de imposiciones ya abonadas con anterioridad para percibir su importe nuevamente. Posteriormente el señor Cattaneo efectuó descargos en sede judicial, señalando la existencia de operaciones marginales con modalidades diversas (compra de cheques posdatados; operaciones con moneda extranjera; recompra de cupones de tarjetas de crédito; existencia de certificados de depósitos a plazo fijo a nombre de personas inexistentes "utilizando" el nombre de empleados del banco, a cuyo vencimiento se cobraban mediante firmas apócrifas y existencia de cajas de ahorro de titulares presuntamente inexistentes -empleadas para canalizar utilidades de operatorias marginales-).

A results de lo actuado, se advirtió una evidente falencia de control interno, que pudo crear las condiciones necesarias para la comisión de eventuales fraudes.

Que, de la verificación parcial N° 41/89, iniciada el 8.6.89 (fs. 969 sub fs. 476/7) en la entidad, pudo comprobarse la existencia de irregularidades en el manejo de la ( *cuenta corriente N° 999002406 a nombre de Comprecoop.* )





101549/83

1092

*Banco Central de la República Argentina*

*Al analizarse en Sucursal Flores los legajos de cuentas corrientes se visualizaron cheques de CICA S.A., a favor de Fernando Vallejo S.A., depositados en la cta. cte. N° 999002406. Solicitado el extracto de la misma, se estableció que pertenecía a Comprecoop y que el volumen de movimientos, así como las sumas involucradas, eran de gran importancia.*

Cabe destacar que se visualizaron cheques librados sobre la cuenta referida, por sumas muy significativas cuyos beneficiarios eran -entre otros- funcionarios de la Mesa de Dinero del Banco Liniers y de inversionistas.

Asimismo se estableció la existencia de débitos practicados en la precitada cuenta que carecían de firma libradora y de las instrucciones no surge claramente el beneficiario ni el concepto por las que se emitieron.

El tratamiento de la cuenta corriente de Comprecoop era particularmente "diferencial", se detectó que desde el 15.2.89 al 10.4.89 (55 días corridos) se registró descubierto en la misma, sin que existiera acuerdo ni legajo de crédito. La gran mayoría de los cheques emitidos eran cursados por Cámara, ingresaban en la de 24 horas, pese a la radicación de la cuenta en Casa Matriz (Liniers) aunque la mayoría de los débitos y créditos correspondían a operaciones efectuadas en otra filial.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al señor **Carlos Alberto Cattaneo** por el cargo 6) formulado en el Informe N° 064/FF/023 de fs. 969 subfs. 876/7, en razón de ser el principal responsable del funcionamiento de dicha sucursal y no poder eximirse de tal responsabilidad alegando desconocimiento de los hechos.

*Cabe poner de resalto en lo referente a éste cargo su intervención personal.*

**III.5. SEÑOR MANUEL ERLICH:** (Integrante titular del Consejo de Vigilancia Síndico, fs. 742, fs. 806 y fs. 969, subfojas 865).

El aludido implicado se agravia y presenta descargo a fs. 843/5, y en lo atinente a los cargos formulados por Resolución N° 530 del 27.07.93 -fs. 969, subfs. 888/90-, allega el que luce incorporado a fs. 969, subfs. 949/72, para finalmente presentar alegato a fs. 994, subfs. 1/10, por los cuales -sintéticamente- se adhiere a las manifestaciones vertidas por la entidad a fs. 856/73, extremo éste que inclina a reproducir, a su respecto, lo expuesto "ut supra" para el banco sumariado.

Que, en orden a la determinación de las responsabilidades que caben a las personas sumariadas por su función directiva, se impone destacar que es la conducta de los inculcados la que, en rigor, generó la transgresión a la normativa aplicable en materia financiera, ocasionando la atribución de responsabilidad a la persona jurídica, y, además mereciendo ellos personalmente reproche en virtud de haberse desempeñado incorrectamente (como integrantes de su órgano de conducción, ya que, desde luego, la actividad del ente ideal se desarrolló mediante la actuación de sus dirigentes.



101549/83

1093

*Banco Central de la República Argentina*

Que al respecto, cabe señalar que era obligación del encartado ejercer la función directiva dentro de las prescripciones legales y reglamentarias del sistema financiero, resultando evidente que su conducta provocó el apartamiento a dicha normativa, dando lugar a la postre, a la instrucción de este sumario.

Cabe apuntar que el prevenido Manuel Erlich además de ocupar el cargo de integrante titular del Consejo de Vigilancia de la entidad también fue síndico de la misma.

Que, en ese orden de ideas, las funciones que atribuye a la Sindicatura el artículo 294 de la Ley N° 19.550 son de fiscalización, verificación y contralor, aplicables también cuando este tipo de sociedad se dedica a la actividad financiera. El síndico debe vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatutos y decisiones de las asambleas lo que importa un control de legalidad y legitimidad que, en el caso específico debe extenderse a los requisitos impuestos por la Ley de Entidades Financieras y sus normas complementarias, ya que las funciones de la sindicatura no se limitan a salvaguardar el patrimonio de la sociedad sino que deben constituirse en garantía de una correcta gestión y tutela del interés público (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencias del 10.5.84, Causa N° 3258 "Banco Credicoop Coop. Ltda. Sumario a la entidad y personas físicas c/Resolución N° 661/81 Banco Central" y del 4.7.86, Causa N° 7129."Pérez Alvarez, Mario A. c/ Resolución N° 402/83 Bco. Central").

Que, además, la jurisprudencia en la materia también ha resuelto que los síndicos "...son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad, son más importantes individualmente que las de cada uno de los directores y la falta, deliberada o no, del debido ejercicio de sus múltiples obligaciones los hace incurrir en gravísima falta que debe ser sancionada..." (C.N.Com., Sala A, 12.3.84-Mackinnon y Coelho Ltda. Cia. Yerbatera S.A.).

Que, coincidentemente, en lo que hace al ámbito específico de las entidades financieras, se ha establecido que " la obligación principal (de los síndicos)...es exigir que los negocios sociales se ajusten estrictamente a la normativa financiera vigente, apelando a las facultades que la ley les otorga para obtener el correcto cometido de su deber primordial, esto es, el control de legalidad de la actividad de la empresa que fiscalizan " (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 4, en autos "PAM CIA. FINANCIERA (en liquidación) s/ instrucción de sumario a personas físicas", fallo del 31.5.82).

Que, en base a lo señalado es que deviene inequívoca la conclusión de que el sumariado no actuó como era su deber al no encauzar el accionar del Directorio dentro de las prescripciones normativas vigentes, ya que la Sindicatura es la encargada por ley de fiscalizar de modo constante y eficiente la actuación del Directorio, por lo cual la omisión, deliberada o no, de cumplir las obligaciones que aquella le impone la hace incurrir en responsabilidades (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I,



101548/83

1094

*Banco Central de la República Argentina*

sentencia del 4.4.89, Causa N° 18.316, AUTOS "LABAL S.A. Cia. Financiera s/ apel. Resol. del B.C.R.A.").

Se remarca que la firma IVA S.A.C.I.F.I. (deudora) estaba vinculada a la entidad a través del señor Manuel Erlich (Síndico titular), quien a su vez poseía amplio poder de administración de la firma mencionada, teniendo además la atribución de solicitar créditos ante las entidades financieras, según surge del poder obrante a fs. 55/63.

**III.6. SEÑOR NORBERTO RAUL AGULLEIRO MOREIRA** (auditor externo de la entidad perteneciente al Estudio Harteneck, López y Cía) - fs. 969 sub fs. 867/9-.

Sobre el particular, corresponde poner de resalto la falta de cumplimiento del citado auditor externo, con relación a las pruebas sustantivas referidas a los estados contables al 31.10.86 y trimestrales al 31.7.87.

Que algunos desvíos fueron reconocidos por el auditor, en tanto que los restantes no pueden justificarse con los pretendidos argumentos expuestos por dicho profesional ya que resulta evidente que las alegaciones formuladas con posterioridad a su reconocimiento constituyen meros ensayos defensistas encaminados a colocarse en una mejor situación procesal.

Que, se advierte, que en sus descargos y documentación acompañada a fs. 969 sub fs. 976/92, fs. 969 sub fs. 1114 subfs. 1/127 y fs. 986 sub fs. 1/8, el encartado efectúa planteos de prescripción, nulidad y caso federal, respecto de la operatoria objeto de reproche, reflexiones de igual tenor a las practicadas por los demás sujetos sumariados, por lo que cabe remitirse a lo señalado precedentemente.

Que, con relación a lo manifestado a través de su presentación de fs. 969 sub fs. 991 que "...Diferencias de criterio en la evaluación del grado de significatividad y riesgo involucrado ....en la determinación del alcance de ciertos procedimientos de auditoría basado en desviaciones excepcionales detectadas por el B.C.R.A. en la Entidad; que fueron posteriormente subsanadas por la Entidad...Aspectos formales de escasa significatividad que no afectan la razonabilidad de la presentación..." es del caso puntualizar las siguientes consideraciones:

Que, en cuanto a que los incumplimientos incriminados no comprometieron la situación patrimonial, financiera y económica del banco auditado, la Sala Contencioso Administrativo N° 3 en el fallo recaído en la causa: "Vazquez Pedro Antonio c/Resol. 742/89 del B.C.R.A." señaló que: "...La responsabilidad disciplinaria de los auditores, como la de los otros órganos de control de las entidades financieras, no requiere un daño concreto resultante del comportamiento irregular, pues el interés público es afectado por el perjuicio potencial (esta Sala 3/5/84, "Crédito Barrio Boedo" y "Bunge Guerico"; 7/10/82, "Cia. Franco Suiza")..."



101549/83

1095

*Banco Central de la República Argentina*

Que, así lo estimó la jurisprudencia al decir que "...dados los fines que la información tiene respecto al Banco Central y a los terceros, y si bien en la aplicación de los procedimientos de auditoría el profesional puede actuar sobre bases selectivas, determinadas según su criterio (conf. Res. Técnica N° 7 y Anexo II -CONAU-1), ello no obsta el cuidado de planificar la tarea teniendo en cuenta el objeto del examen y la característica de aquélla "(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, causa N° 16.196, autos "Olivieri, Marcelo A. s/apel. Resolución N° 204/87 del B.C.R.A.", sentencia del 18.11.88, Considerando III, punto 2).

Que, a mayor abundamiento, se recuerda que: " La circunstancia de haberse subsanado las anomalías detectadas por el B.C.R.A. en una entidad financiera no purga las irregularidades cometidas por el hecho de las operaciones realizadas en contravención a las normas." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 8.3.88, " in re " "Almagro Caja de Crédito Coop. Ltda").

Lo expuesto conduce a desestimar las argumentaciones esgrimidas por el implicado.

Que, en su mérito, cabe atribuir responsabilidad al señor **Norberto Raúl Agulleiro Moreira** por el cargo del presente sumario.

*Que, no obstante lo dicho la entidad de las infracciones endilgadas al citado profesional no resultan de máxima gravedad, circunstancia ésta que ha de tenerse en cuenta al mensurar la sanción aplicable a dicha persona*

#### **IV. SEÑORES RAMON WAINGORTIN y FRANCISCO GOMEZ**

Que procede analizar a esta altura, la situación de los señores Ramón Waingortin y Francisco Gómez, quienes resultaran implicados en las irregularidades estudiadas en el presente tal como se desprende de las Resoluciones Nros. 191 del 23.02.89 -fs. 808/10- y 530 de fecha 27.07.93 -fs. 969, subfojas 888/90-

Que procede excluirlos de las actuaciones toda vez que constan en autos sus respectivos fallecimientos.

En tal sentido se prueba la defunción del primero, señor RAMON WAINGORTIN acaecida el 21.11.87 con la partida que luce glosada a fs. 841/2 y el deceso del señor FRANCISCO GOMEZ registrado el 26.3.89 con la incorporada a fs. 933/4.

Atento a ello, corresponde declarar extinguida la acción respecto de dichos sumariados (Conf. Código Penal, artículo 59, inciso 1°).

**CONCLUSIONES:**



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

Que por todo lo expuesto corresponde sancionar al banco inculcado y a las personas físicas halladas responsables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos, teniendo en cuenta el beneficio obtenido por la entidad bancaria mediante la operatoria realizada.

En cuanto a la sanción que establece el citado inciso 3) del mencionado artículo 41, para su graduación se tiene en cuenta el último tope máximo de \$ 929.310,28 (novecientos veintinueve mil trescientos diez pesos con veintiocho centavos), establecido en la Comunicación "B" 4428 del 8.11.90 (B.O. del 12.12.90) haciendo aplicación del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 en la redacción anterior a la reforma introducida por la Ley N° 24.144 (B.O. del 22.10.92); ello así por ser dicha normativa la que se encontraba vigente a la época de los hechos infraccionales.

Que el Area de Estudios y Dictámenes Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

RESUELVE:

- 1º) Excluir de las presentes actuaciones a los señores **RAMON WAINGORTIN** y **FRANCISCO GOMEZ** por hallarse acreditado sus fallecimientos.
- 2º) Rechazar los planteos de prescripción articulados por el actual **BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A.** (como continuador del **BANCO CREDITO LINIERS S.A.**) y por los señores **NESTOR CLAUDIO PORCEL**, **MANUEL RAMON RODRIGUEZ**, **RAUL MANUEL COUTO**, **JUAN ANDRES DI CIANCIA**, **JOSE PASCUAL PRAT**, **VICTOR EUSEBIO GONZALEZ**, **MANUEL ERlich**, **OSCAR ANTONIO LOPEZ**, **ALEJANDRO ERNESTO LAUREANO LAURENCE**, **LUIS FERNANDO POSSE**, **MIGUEL CARLOS BLANCO**, **LUIS JORGE GONZALEZ** y **NORBERTO RAUL AGULLEIRO MOREIRA**.
- 3º) Desestimar la nulidad impetrada por la entidad sumariada y las personas físicas mencionadas precedentemente.
- 4º) Imponer las siguientes sanciones en los términos del artículo 41, inciso 3 y 42 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.



101549/83

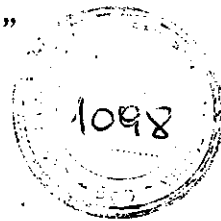


*Banco Central de la República Argentina*

- Al BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A. (como continuador del BANCO CREDITO LINIERS S.A.): multa de \$ 617.055.- (pesos seiscientos diecisiete mil cincuenta y cinco).
- Al señor MANUEL RAMON RODRIGUEZ<sup>x</sup> multa de \$ 506.472.- (pesos quinientos seis mil cuatrocientos setenta y dos).
- Al señor NESTOR CLAUDIO PORCEL<sup>x</sup> multa de \$ 469.300.- (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos).
- Al señor MANUEL ERLICH<sup>x</sup> multa de \$ 455.362.- (pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y dos).
- Al señor VICTOR EUSEBIO GONZALEZ<sup>x</sup> multa de \$ 418.604.- (pesos cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuatro).
- Al señor OSCAR ANTONIO LOPEZ<sup>x</sup> multa de \$ 357.586.- (pesos trescientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis).
- Al señor JOSE PASCUAL PRAT<sup>x</sup> multa de \$ 185.862.- (pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos).
- Al señor CARLOS ALBERTO CATTANEO<sup>x</sup> multa de \$ 185.862.- (pesos ciento ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos).
- Al señor RAUL MANUEL COUTO<sup>x</sup> multa de \$ 134.077.- (pesos ciento treinta y cuatro mil setenta y siete).
- Al señor JUAN ANDRES DI CIANCIA<sup>x</sup> multa de \$ 102.224.- (pesos cientos dos mil doscientos veinte cuatro).
- Al señor LUIS FERNANDO POSSE<sup>x</sup> multa de \$ 83.638.- (pesos ochenta y tres mil seiscientos treinta y ocho).
- Al señor MIGUEL CARLOS BLANCO<sup>x</sup> multa de \$ 83.638.- (pesos ochenta y tres mil seiscientos treinta y ocho).
- Al señor LUIS JORGE GONZALEZ<sup>x</sup> multa de \$ 23.032.- (pesos veintitrés mil treinta y dos).
- Al señor NORBERTO RAUL AGULLEIRO MOREIRA<sup>x</sup> multa de \$ 9.293.- (pesos nueve mil doscientos noventa y tres).
- Al señor ALEJANDO ERNESTO LAUREANO LAURENCE<sup>x</sup> multa de \$ 5.315.- (pesos cinco mil trescientos quince).



101549/83



*Banco Central de la República Argentina*

5º) El importe de las multas mencionadas en el punto 4º) deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas-Multas-Ley de Entidades Financieras -Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley Nº 21.526.

6º) Dése oportuna cuenta al Directorio.

7º) Notifíquese.

GUILLERMO L. LECHNER  
SUPERINTENDENTE DE  
ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIAS